DIGITALIZACIÓN, FIRMA ELECTRÓNICA Y DEBIDO PROCESO*

Valentín Carrascosa López

Doctor en Derecho

Presidente de la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Derecho e Informática

SUMARIO: 1.- CONSIDERACIONES GENERALES.- 1.1.- Evolución de los soportes de documentación.- 1.2.- El documento electrónico y su aproximación a la prueba electrónica.- 1.3.- Diferencia entre el documento electrónico y el documento papel.- 1.4.- Documentos originales y copias.- 1.5.- La firma.- 2.- MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA: UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS ELECTRÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS.- 2.1.- *Hacia una administración electrónica.*- 2.2.- *Proyectos de modernización tecnológica del Ministerio de Justicia.*- 2.2.1.- Sistema de gestión procesal Minerva-Libra.- 2.2.2.- Sistema de firma.- 2.3.- *Conclusiones.*- 3.- SUSTITUCIÓN DEL SOPORTE PAPEL POR EL SOPORTE ELECTRÓNICO, EN LAS LEYES DE ENJUICIAMIENTO, PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES.- 3.1.- Introducción.- 3.2.- *La ley de enjuiciamiento civil.*- 3.3.- *La ley de procedimiento laboral.*- 3.4.- *La ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.*- 3.5.- *La ley de enjuiciamiento criminal.*- 3.6.- *La Ley Orgánica 19/2003 de reforma de la LOPJ.*- 4.- CONSIDERACIONES FINALES.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Los profesionales del Derecho decimos con frecuencia que la vida va por delante de las leyes de manera que éstas se dictan para regular las nuevas situaciones y necesidades que la realidad social plantea a los ciudadanos.

Pues bien, no cabe duda de que el fenómeno hacia el que vamos, de un proceso judicial electrónico es hoy un caso claro de ello, una realidad nueva que suscita la cuestión fundamental de su regulación.

* Presentada durante el X Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho, Santiago de Chile, del 6 al 10 de septiembre de 2004.

Hay que proporcionar un marco legal a este fenómeno imparable que nos lleva a potenciar el proceso judicial electrónico, o telemático y adoptar las medidas necesarias para conseguir seguridad.

Por ello, tras unas consideraciones generales, centraremos nuestra intervención en comentar la realidad española y muy especialmente la normativa aprobada para facilitar y potenciar la digitalización del proceso debido.

1.1. Evolución de los Soportes de Documentación

Coincidimos, con la notaría¹, al considerar que a lo largo de la historia de las relaciones humanas nos encontramos con un común denominador cual es la preocupación constante de que las mismas se desenvuelvan en armonía y que los acontecimientos y hechos importantes queden grabados en la memoria colectiva. Desde los tiempos más primitivos se recurría a revestir los actos y convenciones de formas sacramentales y solemnes, ejecutándose ante todo el pueblo que hacía las veces de testigo. La Biblia contiene ya referencias al documento escrito y su conservación ("Simbólica acción de la compra de un campo", Jeremías 32-18). Los particulares y el Estado, en épocas remotas, utilizaron distintos signos materiales para plasmar todo aquello que necesitaran fuera reconocido por el resto de la comunidad y respetado, usando para realizar sus convenciones privadas piedras, arcilla, ladrillos; más tarde se escribía con el buril, sobre el metal, pasando luego a los escritos sobre papiro o pergamino. La evolución de los soportes materiales del documento, así como las formas extrínsecas de los actos jurídicos, contratos y actos del Estado, no ha ocurrido de un día para otro, sino que por el contrario se realizó en un larguísimo período de tiempo. Desde las conversaciones puramente verbales, la aparición de la escritura, el progreso que significó la imprenta y la alfabetización, hasta el documento electrónico han pasado siglos. La imprenta trajo aparejado cambios de gran importancia, por cuanto permitió la reproducción de lo escrito a una velocidad apreciable. El ordenador y su utilización cada día más asidua en los ámbitos bancario, comercial, financiero, bursátil, registral y ahora judicial, ha desencadenado una revolución de consecuencias aun más importantes y traumáticas que la revolución industrial, ya que no solamente la información es procesada en escaso margen de tiempo, sino que es archivada en Bancos de Datos en mínimo espacio, los cuales pueden comunicarse entre sí, a nivel nacional e internacional.

La noción de documento, en materia jurídica, es totalmente abstracta: es un objeto representativo de un hecho para algunos autores, mientras que para otros es la exteriorización del pensamiento. El documento, cualquiera que sea la postura adoptada, necesita de un sustrato material donde plasmarse -papel, madera, cinta magnética, rollo fotográfico, microfilm, diskette, etc.-; éste, constituye el soporte material del documento. La distinción es de suma importancia, por cuanto la existencia de documentos plasmados sobre modernos soportes -denominados electrónicos- ha introducido cambios fundamentales en las relaciones económicas, sociales y jurídicas. Sería conveniente enumerar cuáles son los soportes electrónicos más conocidos -la tarjeta perforada, cinta magnética y discos-, así como sus características técnicas, clases, inalterabilidad de los mismos, forma de emisión y trans-

misión, pero este no es el objeto de mi intervención y me limitaré a dejar constancia de ello e insistir en que el soporte físico del documento ha variado mucho con el paso del tiempo.² Históricamente fueron, como hemos apuntado, soportes corrientes las tablillas de piedra, arcilla o madera, los papiros y pergaminos, hasta que se llegó al papel. Actualmente, y desde hace ya algunos años, se está dando paso a otro tipo de soportes como los fotográficos, los magnéticos y más recientemente, los ópticos.

1.2. El documento electrónico y su aproximación a la prueba electrónica

La informática nos lleva a poner de manifiesto la necesidad de un nuevo replanteamiento de los conceptos de prueba, firma, documento original o copia, lugar de los actos y, cómo no, el valor probatorio de los comprobantes emitidos por medios electrónicos, y por ello me limitaré a dar unas pinceladas sobre algunos de estos conceptos por considerarlo básico para el desarrollo posterior de mi ponencia.

Para José Eduardo FIESTAS JARAMILLO la incursión de la informática en todos los niveles de las ciencias, está cambiando las viejas formas de pensar en la medicina, astronomía y por supuesto en la ciencia jurídica. Cabe anotar también que estas viejas concepciones han dado lugar a criterios nuevos, en ese sentido es que después del advenimiento de los soportes de piedra, arcillas y papel que dieron origen al documento en sentido tradicional, en estos momentos las nuevas tecnologías dan pie al documento electrónico, que para algunos es un simple adjetivo adherido al sustantivo documento.

No hay duda de que los documentos electrónicos han comenzado a desplazar al tradicional documento papel. Al igual que Internet ha comenzado a reemplazar al servicio postal tradicional como medio para la transmisión de información.

Tanto el legislador como los autores, han tendido a identificar documento, con documento escrito, pero ha habido una evolución tanto en la doctrina, como en la legislación y jurisprudencia que vamos a intentar esquematizar de la siguiente forma:

a) **Para la doctrina**, podemos decir que el documento ha evolucionado así:

PRIETO CASTRO y la mayoría de los procesalistas definían el documento como el objeto o materia en que consta por escrito una declaración de voluntad o de conocimiento o cualquier expresión del pensamiento según resulta de los preceptos de la legislación positiva.³

ROUANET MOSCARDO, concibe el documento como un objeto normalmente escrito, pero excepcionalmente, puede no ser escrito.⁴

² SANCHIS CRESPO, Carolina, "La prueba por soportes informáticos", Tirant lo Blanch, Valencia 1999.

³ CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín, "Valor probatorio del documento electrónico", INFORMÁTICA Y DERECHO núm. 8. UNED Centro Regional de Extremadura en Mérida, 1995, pág. 153.

⁴ ROUANET MOSCARDO Jaime, "Valor probatorio procesal del documento electrónico". INFORMÁTICA Y DERECHO núm. 1. UNED Centro Regional de Extremadura de Mérida-1992, pág. 163 a 175.

¹ SERVIDIO DE MASTRONARDI, Ana María, "Consideraciones acerca del documento electrónico y la seguridad jurídica".

CARNELUTTI sostiene que el documento es una cosa u objeto que mediante la intervención de la actividad del hombre, es capaz de representar un hecho y que su esencia no cambia para nada.⁵

Tanto en la definición de ROUANET, como la de CARNELUTTI, podemos observar como la característica de escrito no se presenta como sustancial o esencial del documento, abriendo así las puertas a la admisión del documento electrónico como tal documento.

b) En la Legislación

El artículo 90 de la Ley de Procedimiento Laboral acoge, expresamente, en el ámbito de la prueba; el documental a los “medios modernos de reproducción de la palabra, de la imagen o del sonido”.

El artículo 230 de la LOPJ establece que “los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales”.

El artículo 26 del Código Penal considera documento “todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria”. Como puede apreciarse, el concepto penal de documento pretende huir de los requisitos tradicionales como la escritura o el papel, para adecuarse a cualquier tipo de soporte capaz de contener datos con relevancia jurídica, como los soportes informáticos.⁶

El artículo 299 de la nueva LEC, establece en su punto 1º los medios de prueba de que podrán hacer uso en juicio y que no son otros que los ya existentes en la Ley anterior.

Lo novedoso son los puntos 2º y 3º así como el artículo 300, ya que estos preceptos apuestan decididamente por la apertura de los nuevos medios técnicos, los cuales forman parte de la noción de “documento electrónico”.

El legislador apuesta decididamente por un criterio de “*numerus apertus*”, es decir ampliando expresamente la lista convencional de medios probatorios con introducción de los “medios de reproducción de la palabra, el sonido e imagen”.

El apartado tercero del artículo 299 prevé una cláusula genérica e indefinida que tiene el mérito peculiar de facilitar la plena aceptación de futuros medios probatorios aún no definidos ni concretados, siempre que “pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes”.

⁵ CARNELUTTI, Francesco. “La prueba civil”, segunda edición, Arayu, Buenos Aires, 1955, pág. 156.

⁶ LÓPEZ GARRIDO, D. y GARCÍA ARAN, M. El Código Penal de 1985 y la voluntad del legislador. Comentarios al texto y al debate parlamentario, Madrid, 1996, pág. 55.

El artículo 23 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que entró en vigor el 12 de octubre de 2002, establece que:

“Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurren el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez”.

El artículo 24 en su apartado segundo nos concreta que:

“En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental”.

El apartado 5 del artículo 3 de la Ley 59/2003 de firma electrónica dice que:

“se considera documento electrónico el redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados electrónicamente”.

Continuando el núm. 8 de dicho artículo con que:

“el soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio”.

c) En la jurisprudencia

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha sido oscilante entre la no aceptación, la transición y la plena aceptación⁷, según mantiene mi alumno de doctorado:

- En principio, en la línea restrictiva y resistente, **no a la aceptación** del valor probatorio del documento electrónico, marcados, entre otros, por la sentencia del T.S. de 30-11-1981.
- En la fase de transición, que marca la sentencia del T.S. de 30-11-1992, que **acepta** el valor probatorio de los medios modernos de reproducción de la imagen y del sonido, **siempre que vengán adverbados por otros medios probatorios** (reconocimiento judicial, peritos, testigos, etc.).
- La **plena aceptación**, que marca la sentencia del T.S. de fecha 24-3-1994, de tales medios de prueba

1.3. Diferencias entre el documento electrónico y el documento papel

En la época de PLATÓN, el diálogo era la forma textual por excelencia, pues la escritura suponía, hablando en términos platónicos, una materialidad agresora de la idea, que degradaba a ésta al nivel de los objetos físicos.

⁷ ELÍAS BATURONE, Julio, “La jurisprudencia ante el documento electrónico (o en soporte no escrito). Su aceptación como prueba documental”, en Tapia, octubre-noviembre de 1996, pág. 69: alumno mío de doctorado y al que seguiremos en otros puntos de nuestra exposición.

El transcurso del tiempo ha dado al traste con esta concepción hasta considerarse que la civilización de Occidente es una civilización de tipo escrito y contenido en el papel.

Ideas, creencias, ciencia, arte y costumbres se han ido volcando en hojas de papel; desde las instituciones hasta los pactos privados, todo ello está confiado en custodia a millones de páginas.

El papel, desde hace siglos, es la memoria del mundo, pero en nuestro siglo aparece un nuevo concepto y un lugar distinto para almacenar esta memoria que ya no se va a recoger en papel sino en soportes informáticos y en memorias elaboradas por medios electrónicos.⁸

El uso de los ordenadores en nuestra vida diaria y el simultáneo incremento de la memoria de los ordenadores ha aumentado exponencialmente la cantidad de información susceptible de ser requerida por las partes durante el periodo de investigación y prueba.

Las diferencias entre el documento escrito y el documento electrónico, son en principio evidentes, lo que no nos puede llevar a negar el carácter de documento de los segundos.⁹ Así encontramos un gran número de autores que mantienen que los registros informáticos no son documentos, ya que no están en un soporte papel, no llevan firma y no existe diferencia en un registro informático, entre copia y original. Pero nuestra opinión se identifica más con aquel sector de la doctrina que considera que los registros informáticos son una forma de escribir, encontrando más similitudes que diferencias, y no considerando estas diferencias como de carácter sustancial, pudiendo señalar entre otras diferencias las siguientes:

- **La codificación del documento electrónico.** Los documentos electrónicos se encuentran estructurados en números binarios conocidos como "bits" que deben ser decodificados.
- **La presencia de información confidencial en el documento electrónico.** Puede surgir la necesidad de solicitar a la otra parte los códigos necesarios para poder usar el documento electrónico correspondiente. En determinadas situaciones el acceso a tales códigos implica el acceso al sistema informático y operativo de la parte contraria, en el que pueda encontrarse información confidencial.
- **El documento electrónico ocupa menos espacio que el documento papel.** Esta diferencia trae consigo otro problema como el ¿de qué modo debe ser entregada la información almacenada electrónicamente? ¿Puede la parte elegir entre presentarlos en "copia electrónica" o que realice una "copia en papel"? (En EEUU hay varias sentencias sobre este tema.)
- **El documento electrónico es frecuentemente invisible.** Existe una gran variedad de información creada por los propios ordenadores y desconocida para el usuario de los mismos. Ejemplo de este tipo de datos son los "ficheros temporales", "las copias de seguridad" o los "datos residuales". Ante la gran variedad de documentos "invisibles", surge la cuestión de si los litigantes pueden requerir la búsqueda de esta información, es decir, ¿aquellos datos que fueron borrados pero que continúan existiendo en la memoria del ordenador como datos residuales constituyen o no documentos?

⁸ CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín, "El derecho informático en España", ICADE, Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Madrid, 1989.

- **El documento electrónico se transmite y duplica rápidamente.** Su duplicidad es muy sencilla, siendo la diferencia entre el original y la copia imperceptible. Por el contrario, en la reproducción del documento papel es perfectamente apreciable la diferencia de la copia con su original.

1.4. Documentos originales y copias

Los autores no están de acuerdo:

Para COLERIO: tenemos el mismo documento electrónico, en diferentes soportes:

- Uno sobre soporte magnético
- Otro sobre soporte fósforo
- Otro sobre soporte papel

Otros autores hablan de documentos electrónicos, ambos originales, de:

- Primer grado (el contenido en el disco duro)
- Segundo grado (el impreso en hoja de papel)

Para ciertos tratadistas la distinción entre original y copia no tiene sentido en el cuadro normal de los sistemas informáticos, por la simple razón de que no existe un original. Sobre este punto podemos distinguir claramente dos tendencias doctrinales: Para una parte de los autores, los documentos informáticos pueden ser considerados como copias. Propuesta que no podemos admitir ya que para que exista copia es necesario que exista un original. Para otros autores, el documento informático puede ser considerado como un original.

En materia de documento electrónico es difícil distinguir el original de la copia, de aquí el que, por algunas legislaciones, se haya lanzado la necesidad de reconocer a la "copia fiel", la misma fuerza convincente que al original.

1.5. La Firma

Sin que sea nuestra intención analizar en profundidad la problemática de la firma electrónica, sí conviene destacar un nuevo paradigma de los procedimientos electrónicos. Entre los modos de "signar" un documento escrito se ha reservado el término "firma" al trazado gráfico, conteniendo habitualmente el nombre, los apellidos y la rúbrica de una persona¹⁰, como algo distinto de otros mecanismos como claves, códigos, signos o sellos. Pero, en el documento electrónico, se emplea el concepto de "firma electrónica" para aludir a cualquier método dirigido a establecer la autenticidad de los documentos electrónicos.

⁹ CARRASCOSA LÓPEZ Valentín y otros, "La contratación informática: el nuevo horizonte contractual. Los contratos electrónicos e informáticos", tercera edición. Editorial COMARES, pág. 58.

¹⁰ STS 3 de noviembre de 1997.

La firma es definida¹¹ en la doctrina como el signo personal distintivo que, por una parte, permite informar acerca de la identidad del autor de un documento, y, de otra parte, permite manifestar su acuerdo con el contenido del acto. Esta ha evolucionado a lo largo de los años y así nos encontramos que¹²:

- **En Roma**, los documentos no eran firmados. Existía una ceremonia llamada "Manufirmatio".
- **En la Edad Media**, el autor de un documento colocaba la impronta de cera de su sello personal.
- **Tradicionalmente**, trazado gráfico, conteniendo habitualmente el nombre, los apellidos y la rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los documentos para darles autoría y virtualidad y obligarse con lo que en ellos se dice (COUTURE).
- **En los tiempos modernos**, cualquier medio que permita una identificación.

La firma electrónica es un instrumento técnico que, por venir a cumplir todas o algunas de las funciones tradicionalmente desempeñadas por la firma manuscrita, denominamos también "firma", y que, por el contexto en que se emplea, adjetivamos como "electrónica".¹³

La materia tiene, en España, una evidente actualidad, pues, el 20 de marzo del presente año 2004, ha entrado en vigor la Nueva Ley de Firma Electrónica que deroga la de 1999.

Resulta evidente que el progresivo abandono del documento físico y con firma manuscrita por el documento informático con firma electrónica o digital, supone sin duda un avance en la celeridad y una importante reducción de costes de las operaciones, cuyo contrapeso se encuentra en la inseguridad de la validez, titularidad o exacto contenido del documento enviado/recibido que produce la aún escasa fiabilidad técnica de las telecomunicaciones. No obstante, con la entrada en vigor de la Ley 59/2003, la firma electrónica es una realidad indiscutible en España.

La firma electrónica es un conjunto de códigos personales y privados que se adjunta al mensaje y se envían por Internet, lo que evita que esta información pueda ser interceptada, manipulada o falsificada.¹⁴

La firma electrónica o digital consiste básicamente en la aplicación de algoritmos de encriptación a los datos, que de esta forma, solo serán conocibles por el destinatario, el cual a la vez podrá comprobar la identidad del remitente, la integridad del documento, la autoría y autenticación, preservando al mismo tiempo la confidencialidad.¹⁵

¹¹ CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín; BAUZA REILLY, Marcelo, y GONZÁLEZ AGUILAR, Audilio. "El derecho de la prueba y la informática" pág. 49, INFORMATICA Y DERECHO, núm. 2. Centro Regional de Extremadura de la UNED, Mérida, 1991.

¹² CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín, "Valor probatorio del documento electrónico", INFORMATICA Y DERECHO núm. 8. UNED Centro Regional de Extremadura en Mérida, 1995, pág.140.

¹³ GUIASO MERENO, Ángela. "Formación y perfección del contrato en Internet", Marcial Pons. Madrid 2004, pág. 81.

¹⁴ "La firma digital del Abogado", Revista del Colegio de Abogados de Cáceres, Fundamentos de Derecho II Epoca núm. 33, junio 2004, página 22 y ss.

¹⁵ BARRIUSO RUIZ, Carlos. "La contratación electrónica" DIKINSON 1998, página 249.

La firma electrónica no constituye un medio técnico independiente y distinto del documento electrónico, sino que por el contrario, es una parte fundamental de dicho documento, con una función primordial y esencial, que es probar la "autenticidad" del documento en soporte electrónico y la "identidad" de la persona que lo suscribe.

La firma electrónica supone una serie de características añadidas al final de un documento. Es elaborada según procedimientos criptográficos, y lleva un resumen codificado del mensaje y de la identidad del emisor y receptor.¹⁶

Hace nueve años, en 1995, en EEUU se regula por primera vez sobre la firma electrónica, en el Estado de Utah, bajo el título "Utah Digital Act", después le siguen otros Estados hasta llegar a la Ley federal norteamericana o "Ley de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional".

En Europa la Directiva 1999/93/CE intenta salir al paso del peligro que suponía una diversidad legal de los Estados miembros y pretende con ella crear un marco comunitario para la firma electrónica.

En España, antes que la Directiva, se aprueba y entra en vigor el Real Decreto Ley 14/1999, sobre firma electrónica con el objeto de fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones Públicas.

El Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, que es la norma que, en nuestro país, inició la legislación sobre este tema, establecía en su artículo 2 las definiciones de firma electrónica y firma electrónica avanzada. Así, la primera se identificaba con el conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar formalmente al autor o a los autores del documento que la recoge. La firma electrónica avanzada, por su parte, es la que permite la identificación del signatario, y ha sido creada por medios que este mantiene bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos.

El artículo 3 del Real Decreto-Ley 14/1999 establecía que "La firma electrónica avanzada, siempre que esté basada en un certificado reconocido y que haya sido producida por un dispositivo seguro de creación de firma, tendrá, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel y será admisible como prueba en juicio, valorándose ésta según los criterios de apreciación establecidos en las normas procesales..."

La transposición de la correspondiente Directiva comunitaria, ha llevado a la nueva Ley, 59/2003, de Firma Electrónica, que persigue promover un uso más generalizado de la

¹⁶ CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín; POZO ARRANZ M^a A; RODRÍGUEZ DE CASTRO, E.P. "La contratación informática: el nuevo horizonte contractual. Los contratos electrónicos e informáticos", Editorial COMARES, 3ª edición, Granada 2000, página 74.

firma electrónica como instrumento generador de confianza en las comunicaciones telemáticas y como dinamizador de la Administración, a la vez que introduce la denominación “firma electrónica reconocida” para identificar con mayor claridad a la firma electrónica que cumple los requisitos necesarios para ser considerada equivalente a la firma manuscrita.¹⁷ Asimismo, se introducen los conceptos de fecha electrónica y de declaración de prácticas de certificación. El DNI electrónico permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos en el ámbito telemático, sentando las bases para la generalización de los instrumentos de firma electrónica en España.

La nueva Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, se constituye en piedra angular del conjunto de disposiciones que tienen como fin dotar de seguridad a las comunicaciones establecidas a través de medios telemáticos, especialmente Internet y el correo electrónico.¹⁸ La propia Exposición de Motivos de la LFE señala en qué se traduce la seguridad que se crea con el uso de la firma electrónica, es decir que “*constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas basándose en fechas electrónicas*”. Es relevante que esta aproximación a los fines perseguidos con el uso de la firma electrónica no abarca la confidencialidad de la información transmitida, puesto que este uso se configura no como un elemento de base de la herramienta sino como un potencial valor añadido.

En definitiva, la nueva LFE supone un nuevo punto de arranque para la firma electrónica en España, con la base de la experiencia adquirida y sin olvidar que estamos ante un elemento central de la denominada Sociedad de la Información.

El objeto de la LFE no es otro que regular la firma electrónica como elemento de seguridad de las comunicaciones electrónicas en sus diversos aspectos, pero también la eficacia jurídica de la misma y finalmente, es objeto de esta ley, conforme a su artículo 1.1., la prestación de servicios de certificación, actividad necesaria en caso de utilización de firma electrónica en comunidades amplias.

De forma novedosa, la nueva Ley dedica un único precepto, el artículo 3, a la regulación de distintas cuestiones relativas a la firma electrónica: el concepto, las clases y los efectos de la firma electrónica así como su incorporación a un proceso judicial y la regulación del documento electrónico.

Hay que destacar que el artículo 3 de la Ley española, hace una distinción entre “firma electrónica”, “firma electrónica avanzada” y “firma electrónica reconocida”. La explicación al porqué del hecho de esta distinción entre lo que podríamos entender como firma simple y

firma valorada o de “calidad” se justifica en el contenido del considerando 20º de la Directiva comunitaria, es decir que el legislador español, en concordancia con el comunitario, quiere resaltar o matizar que no todas las firmas electrónicas tienen el mismo nivel de seguridad y por tanto sólo las que cumplan un número determinado de requisitos podrán ser equiparadas a las firmas manuscritas.

La firma electrónica ordinaria o simple, no utiliza la criptografía de clave pública y no probaría la autenticidad, integridad y consecuentemente el no repudio de la transmisión, pues ambos interlocutores utilizan solo su clave privada.

La firma electrónica avanzada, al igual que la reconocida, se caracteriza por el uso de criptografía asimétrica. Con el sistema de criptografía asimétrica o de clave pública y privada se consigue dotar a las redes de telecomunicaciones de los cuatro elementos de seguridad necesarios: integridad, autenticidad, confidencialidad y no repudio.

La firma electrónica reconocida, según el artículo 3.3. De la LFE, no es más que una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y un dispositivo seguro de creación de firma.

La experiencia ha probado que las diversas técnicas de autenticación de los documentos electrónicos son tanto o más confiables que la firma manuscrita, toda vez que han puesto en funcionamiento sistemas de seguridad de gran garantía.

Las técnicas modernas de autenticación se dividen en tres grandes categorías¹⁹:

- **El Código Secreto o Código de Ingreso.** Supone una combinación determinada de números o de letras que, en principio, solo debe ser conocida por el titular del mismo (PIN).²⁰ Es la más difundida.
- **La criptografía.**²¹ Sistema de codificación de un texto con unas claves confidenciales y de procesos matemáticos complejos (algoritmos) de forma que resulte incomprensible para el tercero que desconozca la clave decodificadora (dos grandes técnicas criptográficas: sistemas simétricos, con una clave, y asimétricos, con dos claves).
- **Los datos biométricos.** Basado en datos físicos o biológicos, pues está constatado que cada ser humano posee un cierto número de rasgos absolutamente exclusivos, lo que permite tomarlos en consideración como elementos identificatorios; los más comúnmente usados son:

¹⁷ Ley 59/2003, de 19 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 20 de diciembre de 2003), que entró en vigor el pasado 20 de marzo de 2004, introduce algunas modificaciones, reformas, mejoras e incluso supresiones; entre ellas podemos mencionar la introducción, como nueva categoría formal, la firma electrónica reconocida, que se equipara fundamentalmente a la firma manuscrita, la eliminación de registros de prestadores de servicios de certificación, el refuerzo de la capacidad de inspección y control del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el establecimiento de las bases para la regulación del DNI electrónico.

¹⁸ CARBALLO, Javier, “Regulación de la firma electrónica en España: Estudio de la Ley 59/2003”, *Economist & Jurist*, Julio - agosto 2004, núm. 82 página 64 y ss.

¹⁹ CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín y otros, “El derecho de la prueba y la informática”, *Informática y Derecho* núm.2. UNED Centro Regional de Extremadura en Mérida, 1991, pág.83-85.

²⁰ El apelativo anglosajón “Personal Identification Number”. Número de Identificación Personal.

²¹ Como hemos dicho la criptografía es una técnica que consiste en el cifrado de mensajes de modo que nadie, salvo quien conozca la clave o claves adecuadas, puede acceder a su contenido. Aún interceptándolos son ilegibles e inalterables. Todo ello está en proporción directa con la calidad de la clave empleada. A mayor calidad, mayor nivel de seguridad. Según especialistas en esta técnica el arte de la criptografía nació hace al menos 2500 años: desde entonces ha desempeñado un papel importante en el devenir histórico. Es posible que uno de los más célebres criptogramas, la Nota Zimmermann, determinase la participación de los EEUU en la primera guerra mundial. Al ser fracturada su clave y descifrado el texto, los estadounidenses se enteraron de que Alemania instaba a México a sumarse a su bando, ofreciendo en contrapartida, ganada la guerra, territorios del norte. BENNET, C.H., BRASSARD, G. y EKERT, A.K., “Criptografía cuántica”, *Investigación y Ciencia*, nº 195, diciembre de 1992, pág. 14.

- Las huellas digitales
- La configuración de vasos sanguíneos de la retina
- La geometría de la mano
- Las huellas de los labios
- El reconocimiento de la voz
- El reconocimiento de la graña del individuo

El ex magistrado del Tribunal Supremo, hoy del Tribunal Constitucional, Jorge RODRÍGUEZ ZAPATA, durante una rueda de prensa ofrecida en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,²² decía que el Tribunal Supremo y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre trabajan en un proyecto que permitirá a los magistrados del Alto Tribunal firmar digitalmente las sentencias y, asimismo, notificar los fallos a los procuradores vía Internet. Se espera que en cuatro o cinco años este servicio esté operativo y que en seis los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad puedan remitir los autos al Tribunal Supremo de forma «virtual» con lo que desaparecerán los actuales rollos de papel.

El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto en funcionamiento su Autoridad de Certificación (ACA) que permitirá firmar electrónicamente a los abogados, y acceder a la presentación telemática de escritos a los Juzgados, al registro de penados, agenda judicial, justicia gratuita, o a la participación de subastas judiciales a través de una infraestructura de comunicaciones segura. Más de cien mil abogados podrán reducir trámites y costes a los ciudadanos, con el uso de la firma digital o firma electrónica.

Quiero concluir dejando claro que la firma electrónica “no representa el futuro sino el presente”.

2. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA: UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS ELECTRÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS

2.1. Hacia una administración electrónica

El Gobierno de la Nación persigue la implantación de la **administración electrónica** mediante acciones emprendidas desde una triple perspectiva: por una parte, a través de actuaciones de dotación de infraestructuras, recursos y soluciones tecnológicas, articuladas en la iniciativa estratégica INFO XXI; por otra, mediante actuaciones orientadas al logro de objetivos concretos de simplificación Administrativa, considerada como condicionante y presupuesto de la administración electrónica, que se estructuran en los planes generales de simplificación, y, finalmente, por medio de la preparación y articulación de adaptaciones normativas que permitan una eficaz aplicación de soluciones tecnológicas.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contiene una decidida apuesta por la abierta incorporación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas a la

actividad administrativa y, en especial, a las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.

Tanto la exposición de motivos como el articulado de la Ley 30/1992, optan de forma clara y específica por la tecnificación de la actuación administrativa frente a las tendencias burocráticas formalistas, terminando así con un evidente fenómeno de disociación entre normativa y realidad: la Administración había integrado los medios técnicos automatizados en su funcionamiento, pero la falta de reconocimiento formal de su validez les confería tan solo un valor instrumental e interno.

Pero entre todas las previsiones que la mencionada Ley contiene sobre la utilización de técnicas automatizadas destaca el artículo 45 -en especial su apartado quinto, que constituye un hecho revolucionario²³- como verdadera piedra angular del proceso de incorporación y validación de dichas técnicas en la producción jurídica de la Administración Pública así como en sus relaciones con los ciudadanos.

El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, aborda precisamente el desarrollo de dicho artículo 45, con la pretensión de delimitar, en el ámbito de la Administración General del Estado, las garantías, requisitos y supuestos de utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

La justicia no podía quedar al margen de estos adelantos y el legislador de 1994 desarrolla el antiguo texto del artículo 230 de la LOPJ en una línea paralela a la inspirada, para la actividad administrativa, del artículo 45 de la Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

Se trata de compaginar el indispensable impulso modernizador de las técnicas y medios al servicio del procedimiento procesal, con el respeto a los derechos de la personalidad y a las garantías procesales, incluida la autenticidad. Y, en aras a la sistematización del conjunto jurisdiccional.

Ningún obstáculo insalvable existía ni existe en nuestra legislación, para reputar procesalmente documento a cualquier objeto que pueda ser llevado físicamente a la presencia del Juez; ni para que las actividades de constancia procesal, esto es, de documentación e incorporación, puedan realizarse a través de soportes distintos al papel y signos diferentes a los más tradicionales del lenguaje.

El propio Vocal del CGPJ encargado de la Comisión de Informática, Fernando FERNÁNDEZ, señalaba en el Diario la Ley que “En el CGPJ existía una decidida apuesta por la incorporación de las nuevas tecnologías como elementos imprescindibles para la prestación de un mejor servicio, estando amparada nuestra actuación por el artículo 230 LOPJ”.²⁴

²² Diario de Noticias La Ley, 27 julio 2003.

²³ SANCHIS CRESPO, Carolina, “La prueba por soportes informáticos”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 86 y ELÍAS BATURONE, Julio, “La incorporación de los medios técnicos en las Administraciones Públicas. Comentario a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre”, en TAPIA, mayo - junio de 1998, núm. 100, pág. 15.

²⁴ Diario de Noticias La Ley de 10-16 de junio de 2002.

Seguramente la mayor de las transformaciones de la adaptación de la Justicia a las nuevas tecnologías está todavía balbuceante y consiste en la implantación de la automatización de los procedimientos, con la crisis consiguiente del órgano administrativo y de otros elementos procedimentales, como puede ser la lengua.

Las Tecnologías de la Información proveen hoy una oportunidad única de transformación al sistema judicial que nos lleve a una justicia transparente, esto es, que informe adecuadamente, comprensible, puntual, responsable y ágil, para lo que necesitamos una justicia "tecnológicamente avanzada".

El desarrollo que han tenido en los últimos años las nuevas tecnologías, las llevó a desplazarse del área administrativa a la del contacto directo con el "cliente", en nuestro caso, a la gestión judicial que con la introducción de las nuevas tecnologías supone coger el tren de nuestro tiempo y ser el vehículo para la modernización de la Justicia. No se trata de un nuevo mecanismo para realizar los mismos procesos; ni siquiera para hacerlos más rápidos; se trata de concebir un nuevo tratamiento del proceso judicial, nos llevan a pensar en la viabilidad del "proyecto argentino de un Juzgado Virtual", que se está experimentando en la Ciudad de Pergamino, que podrá también ser posible en España y nos permitiría que las consultas como la presentación de escritos se haga on-line las 24 horas del día, que supondrá pasar del "vuelva usted mañana" de Larra²⁵, a otra dimensión del tiempo y del espacio, pues será innecesario acudir al Juzgado en todos aquellos casos en que sea posible sustituir la presencia física por la comunicación electrónica, que desde luego, son la inmensa mayoría de los trámites y diligencias judiciales, permitiendo de esta manera el trabajo a distancia, la supresión del papel, el cual ocasiona peso y ocupa espacio (los órganos judiciales ingresan y resuelven a lo largo de un año más de siete millones de asuntos. Esta ingente cantidad de expedientes supone que los edificios judiciales custodian en la actualidad más de mil millones de folios. A ellos se destinan 90.000 metros cuadrados de espacio que en la actualidad resultan insuficientes, por lo que muchos pasillos, oficinas y ámbitos de atención al ciudadano presentan un lamentable estado de almacenamiento de legajos. Esto dificulta tanto la gestión de los procesos como la custodia segura de la documentación, que da lugar, incluso, al robo de expedientes como los sufridos en Málaga y Madrid.

A no muy largo plazo se propone pasar completamente del sistema actual, basado en papel y el procesamiento manual de las causas, a un sistema cuyo soporte principal sea el digital, a través de una Red Informática Judicial, conectada a Internet, que permita la consulta y gestión completa de expedientes digitales, alcanzando el ideal de la oficina judicial "sin papeles", con mayor inmediatez, eficacia, calidad y acceso de la sociedad.

INMEDIATEZ: Las nuevas tecnologías disminuirán el personal auxiliar que intermedia entre el juez y los letrados y los ciudadanos; asimismo, aumentará el contacto interpersonal en los casos necesarios, debido a la descongestión de consultas de mero trámite, obtenida por la automatización de los procesos repetitivos y de búsqueda de información.

EFICACIA: Utilizando las nuevas tecnologías, se buscará la solución de conflictos en tiempo apropiado para tener efecto sobre una sociedad dinámica, todo esto con ahorro de costos (ej: videoconferencia para recibir declaración a testigos internos en centros penitenciarios o que residan en lugares alejados del de la celebración de la vista).

CALIDAD: La existencia de información actualizada de la gestión jurisdiccional y administrativa permitirá un control de calidad del servicio brindado, así como una verdadera política judicial con herramientas de control de gestión hoy casi inexistentes. Asimismo, la transparencia que otorgará al sistema judicial la información confiable y uniforme automáticamente generada, ayudará a desterrar corruptelas y lograr un cambio en la percepción social de la justicia.

ACCESO DE LA SOCIEDAD: Las nuevas tecnologías se pondrán al servicio del acercamiento de la justicia al ciudadano; una herramienta clave será el uso de Internet como interface para consultas remotas y como plataforma de comunicación.

Estos objetivos sólo pueden alcanzarse en el marco de un plan integral de reforma judicial, que prevea las transformaciones necesarias en el ámbito legislativo y en los recursos humanos, administrativos y edificios. Aun hoy se mantiene en lo sustancial el sistema basado en la tramitación escrita del expediente, donde las partes se expresan a través de escritos que se someten a la consideración del tribunal para su trámite en tanto se acumulan ordenadamente (muchas veces "cosidos") en un legajo bajo las condiciones establecidas por la norma procesal. Por ello reformar el modo actual de tramitación de causas judiciales a través del uso de las nuevas tecnologías autoriza a pensar que todos los componentes del sistema judicial serán impactados por esta transformación.

La digitalización de la red, el control por programa almacenado, la fibra óptica, la transmisión digital sincrónica de alta velocidad, los sistemas integrados de gestión y muchas otras tecnologías y mejoras introducidas, permiten el desarrollo de nuevos servicios que van siendo incorporados paulatinamente en el mercado y han permitido un salto cualitativo irreversible en materia de comunicaciones.

Las nuevas tecnologías de la información traen aparejadas la posibilidad de comunicar a todos con todos, en cualquier lugar y con la capacidad de transporte bidireccional de información sonora, visual, de textos y gráficos.

Interactividad y Multimedia serán las palabras claves en este comienzo de siglo, en el que las nuevas tecnologías pretenden sincronizar la hora de la Justicia con la de la sociedad de este tiempo, en el que los parámetros tiempo y espacio han cambiado.

Acortamiento del tiempo que nos permite conocer y aportar una sentencia recientísima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la reforma legislativa del país más ignoto.

Superamos las barreras del espacio, pudiendo estar "virtualmente" en otros lugares sin desplazarnos del nuestro, a través de instrumentos tecnológicos como la videoconferencia o el correo electrónico.

²⁵ MAGRO SERVET, Vicente y DE URBANO CASTRILLO, Eduardo, "La prueba tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Civil", Thomson-Aranzadi, 2003, pág. 25.

La interacción con las máquinas que se evidencia en las nuevas tecnologías informáticas no apunta tanto en dirección a, por ahora, un improbable “juez virtual”, sino a las consecuencias de estar interactuando con máquinas cada vez más sofisticadas, en vez de estar simplemente leyendo una pantalla.²⁶

Con la organización hipertextual de los documentos, todo el juicio es un solo documento con muchos niveles de profundidad, que a través de colores diferenciados proporciona familias de información y permite que a partir de cada dato se pueda trasladar el operador a través del programa con comodidad, ubicando otros datos con los cuales el primero se relaciona lógicamente.

Concebimos un núcleo de gestión digital de la oficina judicial, integrado en redes conectadas a Internet, con posibilidad de tramitar integralmente la producción y recepción de documentos, las comunicaciones internas y externas y la producción de información oportuna para todos los actores del sistema judicial (registros centralizados de causas, estadística, presencia en Internet, consultas remotas de expediente, etc.).

La nueva Ley de Tasas, con el premio de la bonificación, constituye en este punto un incentivo para la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso; la cuota tributaria puede ser, bonificada por la utilización de medios telemáticos en la presentación de escritos procesales,²⁷ impulsando con ello, de acuerdo con la LEC, a presentar escritos y documentos y a realizar los actos de notificación por medios electrónicos, telemáticos y otros semejantes, incorporando al proceso los avances científicos y técnicos.

Son impensables las consecuencias de la digitalización y publicación de los expedientes judiciales en Internet: ¿Cuánto será el ahorro de tiempo de los profesionales recorriendo los Juzgados y Tribunales? ¿Cuánto personal del Juzgado que se dedica a atender a estos profesionales será innecesario? ¿qué personal informático, y con qué jerarquías, pasará a ser indispensable en la plantilla judicial? ¿Qué sucederá con las cuestiones de competencia territorial y domicilio, desdibujadas totalmente en el ciberespacio? ¿Debería aceptarse legislativamente la posibilidad de constituir un “domicilio digital” o “domicilio electrónico”, una dirección de e-mail donde las partes constituyan domicilio legal a los efectos de ser notificados? ¿Si el sistema “se cae”, es decir, no está disponible, deberán suspenderse los plazos procesales hasta que vuelva a estar operativo? ¿Quién podrá acceder a los expedientes digitales?

2.2. Proyectos del Ministerio de Justicia

Los responsables del Ministerio de Justicia están intentando dar soluciones a estas y otras preguntas y por eso, supongo, en los cursos de verano 2003, de la Universidad Interna-

cional Menéndez Pelayo, ha tenido lugar, los últimos días del mes de agosto, un seminario sobre “El futuro de las comunicaciones electrónicas en el sector público”, inaugurado el día 28, por el, entonces, secretario de Estado de Justicia Rafael Catalá Polo, y en el que intervenían, entre otros, Juan Soto, Presidente de la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Ana López-Monís, ex-Directora General de los Registros y del Notariado y Alberto Dorrego, ex-Director General para la Modernización de la Administración de Justicia del ministerio del ramo, que, además, fue el director del encuentro.²⁸

En este seminario, el ex-director general Sr. DORREGO, indicó que el portal de justicia “justicia.es”, integrará todos los servicios de la Administración de Justicia, y comenzará a ofrecer sus servicios a lo largo del mes de septiembre, pero no se tendrá su desarrollo definitivo hasta diciembre; ofrecerá a partir de septiembre un conjunto de servicios “on line” a profesionales de la justicia y ciudadanos particulares, como realizar algunos trámites personales, fundamentalmente los que tienen que ver con registros civiles, vía Internet, tan sólo con seguir una guía de preguntas muy sencillas.²⁹

DORREGO reafirmó la importancia de los proyectos de modernización que se han presentado para “acompañar a las reformas legislativas” y entre ellos nos encontramos con³⁰:

2.2.1. Sistema de gestión procesal MINERVA-LIBRA

El Sistema informático de gestión procesal MINERVA-LIBRA, permitirá la tramitación de todo el procedimiento de manera electrónica. Este sistema no solo automatiza el registro de asuntos procediendo a su reparto automáticamente sino que informatiza todos los trámites del procedimiento hasta la sentencia, posibilitando así la interacción de expedientes. Esta aplicación procesal aporta la infraestructura necesaria para la obtención precisa de datos estadísticos y al mismo tiempo permite que profesionales y ciudadanos puedan obtener una rápida información sobre el estado del pleito.

Minerva es un sistema informático más ágil de tramitación de asuntos y según el Ministerio de Justicia “es el eje vertebral” del nuevo sistema de información de la Administración de Justicia. Esta aplicación, flexible y potente, se encuentra instalada en el Tribunal Supremo, en Tribunales Superiores de Justicia y está en plena fase de implantación en la Audiencia Nacional. Durante el año 2003 se lleva a cabo la implantación de esta nueva herramienta de gestión procesal en las Audiencias Provinciales y permitirá conocer, en tiempo real, el estado de tramitación de un procedimiento.

Por otro lado el Ministerio de Justicia está desarrollando una nueva versión reforzada, altamente robusta y eficaz, del sistema LIBRA (Libra II), que se implantará el presente año en los órganos unipersonales.

²⁶ CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín, “Informática en la Oficina Judicial”, Autores Varios, “Materiales para la Reforma Procesal”, Ministerio de Justicia, Madrid 1991, pág. 596-598.

²⁷ CHOCLAN MONTALVO, José Antonio, “El retorno de la Tasa Judicial”, Derecho y Jueces, año 2, núm. 2, febrero 2003, pág. 2.

²⁸ Diario de Noticias La Ley, 27 agosto 2003.

²⁹ Diario de Noticias La Ley, 28 y 29 de agosto de 2003

³⁰ Según el documento “Proyectos de modernización tecnológica del Ministerio de Justicia”, de fecha 4 de marzo de 2003.

2.2.2. Sistema de firma electrónica LEXNET

El programa Lex Net es una herramienta que tiene por objeto facilitar las comunicaciones electrónicas dentro de la Administración de Justicia. Este programa permite que la información fluya desde unos órganos jurisdiccionales a otros y desde sujetos externos (fundamentalmente abogados y procuradores) hacia la Administración de Justicia a través de un canal de transmisión altamente seguro.

Para ello se ha firmado un importante convenio plurianual con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para proveer de servicios de certificación electrónica a los usuarios y en el seminario de Santander ha habido una mesa redonda sobre el "DNI electrónico: aportación al desarrollo de la Sociedad de la Información".

El sistema de comunicaciones seguras y firma electrónica LEXNET se encuentra instalado en la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, y en órganos unipersonales de León y Palma de Mallorca como proyecto piloto. Este año se pretende llevar a cabo la extensión del sistema a otros órganos judiciales.

2.2.3. Proyecto de digitalización

Este proyecto contempla el actual sistema de grabación analógica de las vistas orales incorporando un sistema digital.

La tecnología digital facilita las operaciones de grabación en las salas de vistas, así como el almacenamiento y custodia de las grabaciones en soportes más manejables y seguros. Por otro lado permite el visionado de forma rápida y sencilla de las grabaciones, o de aquellas partes de las mismas que se desee, desde los ordenadores personales de los usuarios autorizados. Y por último, posibilita la obtención digital de copias para las partes que lo soliciten, perturbando lo menos posible el trabajo de la oficina judicial.

El sistema de grabación digital de las vistas esta plenamente implantado en todos los órganos judiciales colegiados así como en muchos de los órganos unipersonales.

2.2.4. Renovación del parque informático de sedes judiciales

La constante evolución tecnológica hace necesario que se proceda a la sustitución de los equipos actualmente operativos, para que sean plenamente compatibles con las aplicaciones tecnológicas que en la actualidad está desarrollando el Ministerio de Justicia.

En la actualidad están instalados más de 10.000 PC, y unos 4.000 terminales. En el año 2002 se renovaron un total de 3.708 PC lo que representa un 40% del total instalado. El año 2003 se han adquirido unos 3.000 ordenadores más, lo que supone una renovación del 70% del parque informático, que se espera quede totalmente renovado el año 2004.

2.2.5. Sistema de videoconferencia

El sistema de videoconferencia constituye un sistema de comunicación interactivo que transmite simultáneamente la imagen, el sonido y los datos, permitiendo una comunicación bidireccional plena en tiempo real de tal manera que se posibilita un mismo acto o reunión a la que asisten personas que se encuentran en lugares diferentes.

Aplicada a la Administración de Justicia, el sistema de videoconferencia permite la realización de actuaciones judiciales en que intervienen testigos, peritos y encausados entre Juzgados y Tribunales y prisiones, sin necesidad de que los intervinientes se desplacen, respetando en todo momento las garantías y derechos procesales, proporcionando una agilización de la actividad jurisdiccional, mayor seguridad y reducción de desplazamientos al evitarse el traslado de reclusos, y reducción de costes.

La videoconferencia posibilita la comunicación de imagen y sonido en tiempo real entre dos puntos distantes, creando una "reunión virtual" en la que la distancia física deja de ser un impedimento para la celebración de encuentros, como si los participantes se encontraran en la misma sala, pues la distancia física ya no será un impedimento para el desarrollo ágil del procedimiento judicial, que podrá utilizar la videoconferencia en las declaraciones e interrogatorios de procesados, testigos y peritos, auxilios judiciales -tanto nacionales como internacionales-, comisiones rogatorias, rueda de reconocimiento, etc.

Sobre el uso de la videoconferencia se han dictado ya varias resoluciones entre las que entresacamos el auto dictado por la Audiencia Provincial de Alicante, el 29 de julio de 2002, en el que se defiende la viabilidad de la videoconferencia, pero también analiza cuáles son las ventajas -agilización, seguridad, menos desplazamientos, mejor organización del trabajo, reducción de costes- en donde puede aplicarse, cuántos Secretarios deben actuar para dar fe, en este auto se optó por dos Secretarios judiciales: uno se recibe perfectamente la señal, imagen y sonido y que los acusados reciben y entienden perfectamente las preguntas, y de las contestaciones, mientras que el Secretario de la Sala da fe de que se recibe perfectamente la imagen y sonido, produciéndose un perfecto ensamblaje entre ambos fedatarios judiciales.³¹

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Antonio GARCÍA PAREDES, propuso a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y a la Consejería de Justicia de Madrid la instalación de salas de videoconferencia en cada uno de los cinco centros penitenciarios de la comunidad autónoma y en la sede de la audiencia, para notificar a los presos por esta vía.³² De esta forma, en la terminal de la sede judicial se encontraría el secretario judicial y en la de la prisión, el recluso que debe recibir la notificación, previamente identificado por un funcionario penitenciario. El acto quedaría grabado a efectos de su constancia, y la fecha quedaría reflejada en el soporte electrónico, a efectos de la observancia de los plazos legales.

³¹ DE URBANO CASTRILLO, Eduardo, y MAGRO SERVET, Vicente, "La Prueba Tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Civil." Thomson y Aranzadi, 2003.

³² Derecho.com, fecha 13.03.2001

El Plan de Implantación del Ministerio de Justicia se ha puesto en marcha en dos fases.

En una primera fase que comenzó en septiembre de 2001 y que finalizó en enero de 2002, se instalaron un total de 53 equipos de videoconferencia en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas competencias en Justicia, Audiencias Provinciales del mismo ámbito competencial, Fiscalía General del Estado, sede central de los Juzgados de Madrid, etc.

En una segunda fase, que culminó antes de terminar el año 2002 se han instalado un total de 93 equipos de videoconferencia entre Fiscalías, órganos Judiciales, Instituto de Toxicología e Instituto de Medicina Legal.

Durante el año 2003 se valoró la necesidad de nuevas ubicaciones así como la posibilidad de extender el uso de esta tecnología a otros sectores como la Abogacía del Estado, Registros, etc.

2.3. Conclusiones

Podemos terminar este capítulo insistiendo en la necesidad de instalar nuevos sistemas tecnológicos en la Administración de Justicia, utilizando técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, porque la Justicia necesita rapidez y dinamismo. No es tanto un problema de calidad, como de agilidad. Estamos ya en el siglo XXI, en la era de las nuevas tecnologías. Ha llegado la hora de que la Justicia abra las puertas de la modernidad.

La introducción de las nuevas tecnologías permitirá que la tramitación de los asuntos se realice en menos tiempo, disponiendo así de una Justicia más moderna, ágil y eficaz.

El CGPJ parece haber apostado por la implantación de una red interna que en el futuro llegue a comunicar a todos los juzgados y tribunales, y a su vez a éstos con procuradores, abogados y otros operadores jurídicos. Esta red interna tiene ventajas: compatibilidad, confidencialidad, comunicaciones seguras -autenticidad, integridad y constancia fehaciente de la remisión y recepción-, pero también el inconveniente de no ser asequible a cualquiera que tenga necesidad de relacionarse con la justicia, y que podría hacerlo con una red abierta como Internet.

Debemos mencionar en este marco el Proyecto Minerva, sistema de gestión procesal integral y tramitación de asuntos, que a su vez contiene el Proyecto Lexnet para la comunicación segura entre los operadores jurídicos y la Administración de Justicia, los cuales como hemos apuntado antes, se vienen implantando progresivamente en el territorio del Ministerio de Justicia.³³ Por su parte, varias de las comunidades Autónomas con competencias transferidas tienen a su vez sus propios sistemas Intranet, es decir, aplicaciones informáticas y sistemas propios de comunicación segura que conforman otra red cerrada.

Para que estas distintas redes internas no constituyan sistemas con claras limitaciones geográficas y puedan a su vez estar conectadas entre sí, el CGPJ ha desarrollado el Proyecto *neuro judicial*, red de comunicación telemática interna con un nodo central en el propio CGPJ y diversos nodos socios, que permitirá, entre otras cosas, que todos los juzgados y tribunales de España estén conectados entre sí.

Los puntos 12 y 14 del Pacto de Estado para la Reforma de la justicia, suscrito entre el Gobierno de la Nación y los Partidos Popular y Socialista, prevén la adopción de medidas encaminadas a implantar plenamente las nuevas tecnologías en la Justicia; esperemos que así sea y que vayan acompañadas de las reformas legislativas correspondientes.

3. SUSTITUCIÓN DEL SOPORTE PAPEL POR EL SOPORTE ELECTRÓNICO, EN LAS LEYES DE ENJUICIAMIENTO, PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES

3.1. Introducción

El Pacto de Estado para la reforma de la justicia prevé su mejora y actuación de acuerdo con las necesidades sociales. Dicha mejora se debe sustentar en la modernización de la oficina judicial y en la dotación de una serie de medios, a través de un plan de infraestructuras que supla determinadas carencias. Ambos puntos convergen en la conveniencia de crear una oficina judicial ágil, rápida, eficaz y con una correcta atención al ciudadano. Una oficina judicial saturada de expedientes difíciles de ubicar o archivar, con la consiguiente dificultad para encontrarlos, en ocasiones produce en la sociedad la imagen de una justicia lenta e ineficaz.

Consecuencia de las numerosas reformas legales que se están llevando a cabo para la mejora y modernización de la justicia es el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio (BOE, fecha 30 julio de 2003), de modernización de los archivos judiciales, que tiene por objeto modernizar y regular la organización y funcionamiento de los archivos judiciales así como el procedimiento a través del cual se efectúe el expurgo de la documentación judicial.

Curiosamente se puede obtener una única definición de qué considerar como documentos judiciales en esta normativa de muy reciente aprobación. Me estoy refiriendo al Real Decreto 937/2003, y en concreto, en el artículo 1º, apartado cuarto, podemos obtener lo que considero la definición más concreta de los documentos emitidos por los órganos judiciales, del siguiente modo:

“Se consideran documentos judiciales tanto las actuaciones procesales como aquellos que hayan sido aportados por las partes o por terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos, con independencia de cuál sea el soporte material en que se encuentren recogidos”.

En este sentido se aporta una definición de documentos judiciales muy original en nuestra legislación, que es heredera de legislaciones procesales y de derecho sustantivo de más de dos décadas.

No obstante, y siguiendo un orden cronológico, debemos partir de una serie de artículos procedentes de las legislaciones orgánicas, procesales y gubernativas.

³³ Diario de Noticias la Ley, “Justicia y nuevas tecnologías”, número especial, abril 2002.

El artículo 230 de la LOPJ, en su redacción dada por la Ley Orgánica 16/94, de 8 de noviembre, introdujo legalmente la recepción por parte de la Administración de Justicia de los medios informáticos.³⁴ Su desarrollo se verificó mediante el Reglamento 5/95, de 7 de junio, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por Acuerdo del Pleno del CGPJ de la misma fecha. Concretamente fue en los artículos 77 y siguientes de la norma reglamentaria, los cuales conforman el Título V, bajo la rúbrica “del establecimiento y gestión de los ficheros automatizados bajo la responsabilidad de los órganos judiciales”.

Sin embargo, la citada normativa resulta ser una mera declaración de principios que exige, para la completa implantación de los nuevos medios técnicos en los órganos jurisdiccionales, la plena incorporación de los sistemas informáticos electrónicos y telemáticos a las leyes de enjuiciamiento.

Todas sus previsiones han tenido una acogida concreta en la LEC/2000.

Las previsiones actuales apuntan hacia la incorporación de la firma electrónica, el incremento, a través de las nuevas tecnologías, de la comunicación con los profesionales, los ciudadanos y la mejora de la conexión interna entre los propios órganos judiciales.

La Comisión de Informática Judicial del Consejo General del Poder Judicial acordó, en su reunión del 22 de marzo de 2002, recomendar la progresiva sustitución del soporte papel utilizado tradicionalmente en los libros de registro por el formato informático, remitiéndose esta recomendación al Servicio de Inspección del CGPJ para ir avanzando de forma progresiva en dicha sustitución.

Las aplicaciones informáticas para la gestión procesal, implantadas en la actualidad en la casi totalidad de los órganos judiciales, permite entre otras utilidades, obtener el listado de asuntos y los libros registros con todos los datos que tradicionalmente se llevaban en los libros en soporte papel.

El objetivo que se está logrando es el de impulsar el desarrollo e implantación de la informática como herramienta diaria en los órganos judiciales, lográndose que sean más ágiles y eficaces al evitarse la duplicación de tareas.

Antes de entrar a comentar la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás leyes, es conveniente, por su carácter de generalidad y mera declaración de principios, analizar el artículo 230 de la LOPJ y el Reglamento 5/95, de Aspectos Accesorios de las actuaciones Judiciales.³⁵

a) Artículo 230 LOPJ, reformado por Ley Orgánica 16/1994.

“1. Los Juzgados y Tribunales **podrán** utilizar cualesquiera medios técnicos, *electrónicos, informáticos y telemáticos*, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación.

2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

3. Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.

4. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que disponga los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

5. Reglamentariamente se determinarán por el Consejo General del poder Judicial los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.³⁶

Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad.

Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia *deberán ser compatibles entre sí* para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial (las negritas, subrayados y cursivas son mías).”

Antes de entrar en el análisis de cada uno de los apartados de este artículo, hay que llamar la atención de la suma importancia que merece el precepto en su conjunto, cuyos rasgos meritorios han sido suficientemente señalados en la exposición de motivos de la Ley reformadora de 1994, y que, en el Acuerdo de 7 de Junio de 1995, del Consejo General del Poder Judicial (que veremos más detenidamente en el apartado siguiente), asimismo, se destaca de una forma breve y solemne, en su propia exposición introductoria, punto VI, con las siguientes palabras:

³⁴ Artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que como recordamos establece que: “los juzgados podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones”.

³⁵ El Acuerdo del Pleno del CGPJ de 26 de febrero de 2003, modifica el Reglamento 5/1995, en lo relativo a los servicios de guardia para la optimización de la coordinación policial-judicial en la puesta en funcionamiento de los Juzgados de guardia a partir del día 28 de abril de 2003, fecha de la entrada en vigor de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de juicio rápido.

³⁶ Sustituida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE nº.298, de 14 de diciembre de 1999), que deroga, en su única disposición derogatoria, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, más conocida por “LORTAD” y a la que dedica sus 542 páginas el número 6-7 de INFORMÁTICA Y DERECHO, Centro Regional de Extremadura de la UNED en Mérida, 1994. A ambas se dedica nuestro trabajo “Protección de datos de carácter personal”, Estudios Jurídicos, Cuerpo de Secretarios Judiciales, CEJAJ 1-2000 pg. 457-505.

“Una de las novedades más notables de la Ley Orgánica 16/1994, reformadora de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha sido la redacción que ha dado a su artículo 230, precepto que significa de modo claro y rotundo la recepción en el mundo judicial de los medios informáticos (...)”.

Veamos, sin más preámbulo, el contenido de cada uno de los apartados del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El primer párrafo tiene la virtud de abrir la posibilidad³⁷ de la utilización por parte de los Juzgados y Tribunales, es decir, de la Administración de Justicia, de “*cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones*”, si bien con “*las limitaciones que establece la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre y demás que resulten de aplicación*”.

Una vez dicho lo anterior, pasemos a continuación con el análisis del segundo apartado del artículo 230 de la LOPJ antes enunciada, que es el que más hace alusión a la validez de los documentos electrónicos en el ámbito de la administración de justicia.

El contenido de este apartado viene a constituir una adaptación, resumida pero exacta, de lo previsto en el párrafo quinto del artículo 45 de la Ley 30/1992, que como en el resto de sus apartados, sirven de “espejo e imagen” a la regulación del novedoso artículo 230 de la LOPJ.

En este sentido, este apartado segundo consagra la validez jurídica, como “documento original” de los documentos emitidos “*por los medios anteriores*”, es decir, por “*medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos*”, previstos en su apartado primero.

La variedad del soporte viene reconocida al decir que, “*cualquiera que sea su soporte*”, empleando los mismos términos que su homónimo apartado quinto del artículo 45 de la Ley administrativa.

Por otro lado, dicha “*validez y eficacia*” del documento así emitido otorga un valor de original, cuando se emplea con los requisitos establecidos en la ley administrativa, es decir, de dos tipos: El primero, “*cuando quede garantizada su autenticidad, integridad*”. El segundo, “*y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales*”.

Dicho sea lo anterior, pasemos a analizar el tercer apartado del artículo 230 LOPJ, que como se recordará, decía lo siguiente:

“Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.”

³⁷ El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, no utilizaba el término “posibilidad” sino “obligatoriedad”, en el artículo 230 LOPJ, sin perjuicio de que pueda acogerse algunas excepciones, cuya concreción debería corresponder en exclusiva al Secretario Judicial en tanto que autoridad que tiene atribuida con independencia y autonomía la función de documentación y el ejercicio de la fe pública.

Se trataría, en este tercer párrafo, de reconocer los requisitos que debe tener todo procedimiento judicial que se tramite por soporte informático, a saber, garantizar la:

- 1º.- Identificación.
- 2º.- Ejercicio de la función jurisdiccional.
- 3º.- Confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan.

Constituye, por lo tanto, una adaptación, bastante mejorada, desarrollada y superada, de los requisitos establecidos en su homónimo apartado tercero del artículo 45 de la Ley administrativa que, más escuetamente, dice al respecto:

“Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce.”

Es decir, que coincide este texto, prácticamente, con el contenido observado en el apartado tercero del artículo 230 de la LOPJ, si bien, “*el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce*” (Ley administrativa), se concreta en la LOPJ, con la frase, más ajustada a la función jurisdiccional que se regula, “*el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce*”.

Por otro lado, se añaden en la Ley Orgánica del Poder Judicial los requisitos de “*confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal*” que no venían contemplados inicialmente en la Ley 30/1992 (administrativa), por constituir un necesario desarrollo y cumplimiento de lo previsto, a este respecto, en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento de los Datos de Carácter Personal, en el ámbito de la Administración de la Justicia.

A continuación, el apartado cuarto del artículo 230 de la LOPJ hace referencia al empleo de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, que alude en su apartado primero, por parte, no ya desde el propio órgano judicial, sino desde fuera, es decir, por parte de los justiciables, o como viene definido en este párrafo, “*personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses*”.

b) Artículo 79 del Reglamento 5/95, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Hace referencia a la posible utilización de los documentos electrónicos, si bien creo que, antes de nada, es mejor reproducir su contenido literal:

“Los datos de carácter personal que hayan de incorporarse a los ficheros de datos jurisdiccionales se recogerán de los documentos o escritos que obren en el procedimiento o asunto o de las actuaciones que, con sujeción a las normas procedimentales, se realicen en ellos (...) (las negritas y subrayado son míos)”.

Bien, como podemos comprobar, al principio de este precepto se habla de cómo debe entenderse formados los ficheros de “datos jurisdiccionales”, y al respecto, se dice que “*los*

datos de carácter personal (...) se recogerán de los documentos o escritos que obren en el procedimiento (...), es decir, que se distingue claramente por el Reglamento, los documentos, por un lado, de los simples escritos, por el otro.

A mi modo de ver, tal distinción no es arbitraria ni casual, sino que por lo contrario, obedece al nuevo concepto de documento amplio que se reconoce en la Ley Orgánica del Poder Judicial a partir de la nueva redacción del artículo 230, y especialmente, en la diversidad de soportes materiales y técnicos que se alude en el trascendental apartado segundo de este importante artículo.

A la vista de estos y otros preceptos que de forma genérica o más específica regulan esta materia,³⁸ podemos llegar a la conclusión de que el legislador ha querido definitivamente establecer un amplio ámbito de aplicación de las "nuevas tecnologías" en todo lo relativo a las comunicaciones procesales. Así, podrán emplearse medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos y similares, tanto en la notificación de resoluciones judiciales, como en general para la presentación, envío o recepción de escritos y documentos entre los distintos sujetos que pueden intervenir en el proceso; más concretamente: del órgano jurisdiccional a las partes o a sus representantes y a terceros, incluidos los actos de auxilio a la justicia, de las partes y terceros al órgano jurisdiccional, entre órganos jurisdiccionales -auxilio nacional e internacional-, entre las distintas partes o incluso entre los abogados y procuradores de una parte.³⁹

3.2. La Ley de Enjuiciamiento Civil

3.2.1. Aspectos destacados de su exposición de motivos.

Hasta la promulgación de la actual LEC no existía una regulación expresa de la prueba por soportes informáticos, pero después de la promulgación de la nueva LEC este problema ya ha dejado de existir: en la nueva LEC se regulan medios de prueba concretos para la incorporación al proceso de las pruebas contenidas en modernos medios tecnológicos.

La Exposición de Motivos⁴⁰ de la LEC/2000 señala el reconocimiento expreso del uso de estos medios electrónicos e informáticos en las actuaciones judiciales y prevé con carácter general:

³⁸ Artículos 230 y 271 de la LOPJ, 135, 162 y otros de la LEC, artículos 77 y ss del Reglamento de 5/1995, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre normas reguladoras de la firma electrónica y la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

³⁹ DE HOYOS SANCHO, Montserrat, "Aspectos procesales de notificación y nuevas tecnologías" núm. 5751 de 1 de abril de 2003 de Diario La Ley.

⁴⁰ "La Ley, atenta al presente y previsora del futuro, abre la puerta a la presentación de escritos y documentos y a los actos de notificación por *medios electrónicos, telemáticos y otros semejantes*, pero sin imponer a los justiciables y a los ciudadanos que dispongan de esos medios y sin dejar de regular las exigencias de esta comunicación. Para que surtan plenos efectos los actos realizados por esos medios, será preciso que los instrumentos utilizados entrañen las garantías de que la comunicación y lo comunicado son con seguridad atribuibles a quien aparezca como autor de una y otro. Y ha de estar asimismo garantizada la recepción íntegra y las demás circunstancias legalmente relevantes.

Es lógico prever, como se hace, que, cuando esas seguridades no vengán proporcionadas por las características del medio utilizado o éste sea susceptible de manipulación con mayor o menor facilidad, la eficacia de los escritos y documentos, a efectos de acreditamiento o de prueba, queda supeditada a una presentación o aportación.

- Que la documentación de las actuaciones, no sólo se realice mediante actas, notas y diligencias, que son los medios tradicionales, sino también con los medios técnicos que reúnan las garantías de integridad y autenticidad.
- Que las vistas y comparecencias orales se registren o graben en soportes aptos para la reproducción del sonido y la imagen.
- Se abra la puerta para la presentación de escritos y documentos, así como la realización de diligencias y otros actos de comunicación, por medios electrónicos, telemáticos y otros semejantes, regulándose las exigencias para su verificación. Todo ello en atención al presente y con previsión de futuro, pero sin imponer a los ciudadanos y a los justiciables que dispongan de estos medios.
- Para que surtan plenos efectos los actos realizados por esos medios se establecen una serie de requisitos: que entrañen una garantía de seguridad –tanto en el contenido de la comunicación y de lo comunicado, como la atribución de quien aparezca como autor de una y otro–; que quede garantizada la recepción íntegra y las demás circunstancias legalmente relevantes; y, finalmente, cuando no se cumplan los anteriores requisitos de seguridad y garantía, por razones de cautela, la acreditación o la prueba quede supeditada a una presentación o aportación posterior que permita el necesario examen y verificación.
- El reconocimiento de los avances científicos y técnicos y su posible incorporación al proceso civil. Sin perjuicio de las medidas, indicadas anteriormente, que garanticen la seguridad jurídica.
- La Ley establece estos nuevos mecanismos con la razonable suposición de que los procuradores, abogados y no pocos justiciables, irán disponiendo progresivamente de medios de comunicación distintos a los tradicionales.
- La Ley tiene en cuenta en sus previsiones el sistema informático judicial, lo cual limita la justificación de los retrasos indebidos.

que sí permite el necesario examen o verificación. Pero estas razonables cautelas no deben, sin embargo, impedir el reconocimiento de los avances científicos y técnicos y su posible incorporación al proceso civil.

En este punto, la Ley evita incurrir en un reglamentismo impropio de su naturaleza y de su deseable proyección temporal. La instauración de *medios de comunicación* como los referidos y la determinación de sus características técnicas son, por lo que respecta a los órganos jurisdiccionales, asuntos que encuentran la base legal apropiada en las *atribuciones* que la Ley Orgánica del Poder Judicial confieren al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno. En cuanto a los Procuradores y Abogados e incluso a no pocos justiciables, lo razonable es suponer que irán disponiendo de *medios de comunicación distintos a los tradicionales, que cumplan* los requisitos establecidos en esta Ley, en la medida de sus propias posibilidades y de los medios de que estén dotados los tribunales.

Para el auxilio judicial, en cuyo régimen, entre otros perfeccionamientos, se precisa el que corresponde prestar a los Juzgados de Paz, la Ley cuenta con el sistema informático judicial. En esta materia, se otorga a los tribunales una razonable potestad coercitiva y sancionadora de los retrasos debido a la falta de diligencias de las partes (las negritas, cursivas y subrayados son míos)."

- De todas las actuaciones públicas y orales, en ambas instancias, quedará constancia mediante los instrumentos oportunos de grabación y reproducción, sin perjuicio de las actas necesarias.

Bien, como podemos observar, la nueva LEC del año 2000, tiene una voluntad muy seria de regular la utilización de los medios modernos de comunicación en el proceso civil, de tipo electrónico, telemático e informático, y lo hace con el suficiente rigor y mesura que tan necesaria, como delicada, materia lo requiere.

No obstante, voy a puntualizar dos cosas en este preciso instante:

La primera, que en esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, se está abriendo la posibilidad de la utilización de medios técnicos que expresamente se facultaba en el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción actual reformada por la Ley de 1994, y especialmente, en los apartados primero y cuarto.

Y segunda, que a pesar de contemplarse y destacarse las "cauteladas necesarias", o como en el mismo texto se indica, "razonables", hay que poner en un lugar de "mérito" sumo la apuesta, claramente abierta, sincera y, a mi juicio, decidida para el empleo de tales medios, y que viene reflejada en esta importante frase: "(...) Pero estas razonables cautelas no deben, sin embargo, impedir el reconocimiento de los avances científicos y técnicos y su posible incorporación al proceso civil."

3.2.2. El envío y la recepción de escritos y documentos por medios técnicos

Los artículos 135.5 y 162 abren la puerta a los actos de comunicación y traslados de escritos y documentos entre los órganos judiciales y las partes y los profesionales a través de medios, informáticos, electrónicos, telemáticos y otros semejantes, siempre que se disponga de esos medios, por supuesto, y siempre que se garantice la autenticidad de la comunicación y de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción.

Sin duda, entre ellos estará el correo electrónico, una vez que contemos todos los juzgados e intervinientes en el procedimiento con la firma electrónica debidamente autorizada. El Ministerio de Justicia previa aprobación del Consejo General del Poder Judicial -artículo 230 LOPJ-, tendrá que instaurar y asignar a los juzgados y tribunales los medios y herramientas informáticas necesarios, entre ellos, por supuesto, la firma electrónica de cada juez o secretario, u órgano judicial.

En algunos juzgados de Zaragoza se ha llevado a cabo una experiencia piloto, realizándose las comunicaciones a través de correo electrónico, con uso de firma electrónica: desde el propio juzgado se firma electrónicamente las resoluciones por el juez o secretario, y son enviadas al Servicio de notificaciones del decanato que, dejando constancia de su recepción las reenvía al Servicio de recepción del Colegio de Procuradores, quien, tras acusar recibo, las reparte a cada colegio a través de sus claves privadas.⁴¹

Supongo que en un futuro no muy lejano, todos nos veremos inmersos en un proceso electrónico y las comunicaciones se harán directamente del órgano judicial a los procuradores, superando la importante y pionera experiencia de Zaragoza.

El artículo 135 LEC/2000, bajo la rúbrica "presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales", regula el modo de cómo deben presentarse los escritos y documentos sujetos a plazo, rigiendo de forma general que cuando se presenten se dará a la parte recibo de su presentación y se consignará por diligencia el día de su presentación. Siendo, por su parte, el artículo 136, del mismo cuerpo legal, el que establece cuándo se produce la preclusión para que efectivamente surta efectos el acto procesal.

Destaquemos, en primer lugar, el apartado 5 del artículo 135, que consta de dos párrafos perfectamente diferenciados, el primero regulador del envío y la recepción por estos medios y, el segundo, ordenador del cumplimiento de los requisitos a efectos de prueba y para el cumplimiento de requisitos legales.⁴² En el primero de ellos se establece que:

"Cuando los tribunales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en el tiempo establecido conforme a la ley."

Pero seguidamente, el 2º párrafo de este mismo apartado 5 del artículo 135, recoge que:

"Sin embargo de lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, éstos habrán de hacerse llegar al tribunal dentro de los tres días siguientes al envío efectuado según el párrafo anterior."

Por consiguiente, el primer párrafo establece la posibilidad del uso de medios técnicos (fax, sistemas telemáticos...) y en el segundo se fijan los presupuestos cuando se trate de originales o copias fehacientes, pero unido a otro aspecto de suma importancia, que su recepción electrónica o informática producirá la interrupción del plazo o término señalado para la realización de ese concreto acto procesal, no produciéndose la preclusión señalada en el artículo 136.

Otro tema, como ya hemos señalado, es el recogido en el segundo párrafo del artículo 135.5, donde se determina un límite temporal de tres días para presentar los documentos originales, a contar desde el siguiente al envío, a efectos de prueba y cuando la ley exija disponer de los documentos originales o, en su caso, de copias fehacientes, siendo en este último caso donde el Secretario Judicial, a petición del interesado, cotejará los documentos dejando testimonio suficiente en autos y devolviendo los originales. Así, el artículo 140 LEC/2000

⁴¹ MARTÍN-BORREGÓN y GARCÍA DE LA CHICA, Javier, "Actos de comunicación en la Ley de Enjuiciamiento Civil", núm. 10, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, mayo-agosto 2001.

⁴² JAUME BENNASAR, Andrés, "El valor probatorio del documento electrónico en sede procesal civil", tesina del período de investigación, de mi alumno de doctorado, junio 2002.

regula que quien acredite un interés legítimo podrá obtener copias simples o testimonios de los escritos y documentos obrantes en autos, siempre que no tengan atribuido el carácter de reservados. Este último aspecto puede ser más dificultoso cuando lo que deba corejarse sea el contenido, por ejemplo, de un disquete.

Por su parte, el apartado 6 de este mismo precepto recoge que el traslado de los escritos y documentos podrá efectuarse, a los procuradores o a los demás litigantes, por medios técnicos como prevé el apartado anterior siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Además, se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título I del Libro II, regulador “de la presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios e instrumentos”. Simplemente añadir que es en el Capítulo IV donde se establece el régimen aplicable al traslado de copias de los escritos y documentos a los intervinientes o procuradores, novedad implantada por la nueva norma procesal en el sentido de que cuando el litigante se halle representado por Procurador, el traslado de escritos y documentos debe efectuarse con carácter previo, computándose el plazo para efectuar una actuación procesal desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas (artículos 276 y 278).

3.2.3. *La documentación de las actuaciones y de las vistas mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y del sonido.*

La documentación de la práctica de la prueba, se realiza por o bajo la dirección del Secretario judicial, que en todo caso es a quien corresponde dar fe de las actuaciones judiciales (artículo 145, LEC). Y si el acta escrita la realiza de propia mano el Secretario, la grabación de las actuaciones, y su reproducción, esenciales para la fase eventuales recursos, que constituyen lo que podemos denominar “acta electrónica procesal”, pueden materialmente llevarse a cabo por otra persona, pero bajo la responsabilidad del Secretario Judicial.⁴³ Ello es consecuencia de la aceptación de estos medios tecnológicos, antes por la LOPJ, artículo 230, y ahora por la LEC, artículos 146 y 147.

El Capítulo IV de la LEC/2000, artículos 145 a 148, está dedicado a la fe pública judicial y a la forma de documentar las actuaciones, así como a la formación, custodia y conservación de los autos, tareas encomendadas al Secretario Judicial como depositario y garante de la fe pública judicial en las actuaciones procesales. A todo ello hay que añadir el artículo 187 sobre la documentación de las vistas. Han cobrado mucha importancia estas funciones ya que, en virtud del artículo 137, se debe cumplir taxativamente el principio de inmediación con la presencia de los Jueces y de los Magistrados miembros del tribunal en todas las declaraciones, pruebas y vistas, so pena de nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones.

Concretamente varias son las funciones que tienen trascendencia con relación al tema que nos ocupa, en las que el Secretario Judicial tiene un papel primordial –cuestiones que

deben concordarse con el análisis efectuado de la LOPJ y las normas de desarrollo-, y que se pueden sistematizar del siguiente modo:

a). La expedición de copias certificadas y testimonios (artículo 145): Estas actuaciones adquieren especial consideración cuando se trata de cotejar el contenido de un soporte electrónico o informático. Varias son las tesis que se pueden plantear a la hora de determinar si el contenido, por ejemplo de un disquete, es un original o se trata propiamente de una copia de los datos obrantes en el disco duro, ya que según la opción a la que nos acojamos bastará con hacer una copia del contenido del soporte o, en el otro caso, se deberá acudir al ordenador de origen para realizar efectivamente el cotejo de la información.

b). La documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y del sonido (artículos 146 y 147): Comenzaremos por el contenido del artículo 147, el cual establece que:

“Las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.

La grabación se efectuará bajo la fe del Secretario Judicial, a quien corresponderá la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que la grabación se hubiere efectuado.

Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.”

Varias son las cuestiones que cabe analizar de este precepto. En primer lugar recoge que “... se registrarán...”, incorporándose en este supuesto un mandato dirigido al órgano judicial para que la actuación oral concreta se verifique con la utilización de dichos medios técnicos. Es por todos conocido que la totalidad de los Juzgados o Tribunales no poseen para estos menesteres dichos recursos, aunque también es cierto que actualmente se están realizando esfuerzos para la dotación de instrumentos técnicos, ello en cumplimiento de la Disposición Adicional 3ª de la LEC/2000, en la que se recoge que en el plazo de un año, a partir de la aprobación de la presente Ley –plazo ya superado con creces-, el Gobierno y las CC.AA. con las competencias transferidas, adoptarán las medidas necesarias para que los Juzgados y Tribunales dispongan de los medios materiales y de los recursos humanos precisos para la constancia de las actuaciones orales conforme a lo dispuesto en el artículo 147. Proceso que en la actualidad no ha finalizado, así el artículo 187 respecto a las vistas, como posteriormente comprobaremos, realiza una precisión al respecto.

En segundo lugar, el responsable de la grabación y de la custodia será el Secretario Judicial. ¿Cómo guardará el Secretario las actuaciones en el proceso electrónico?

En tercer y último lugar, los pleiteantes, es decir los que han intervenido en el acto procesal concreto, podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales. La Disposición Adicional 4ª, de la misma norma procesal, se refiere a las tasas para la obtención de copias simples de documentos e instrumentos que deberá regularse mediante Real Decreto.

⁴³ DE URBANO CASTRILLO, Eduardo, “Funciones del Secretario Judicial en la publicidad de las actuaciones”, en Honor, intimidad y proceso penal, Estudios Jurídicos del Cuerpo de Secretarios Judiciales, II-2000, CEJAJ, Ministerio de Justicia, pgs. 461 a 488.

Las partes podrán pedir copia pero no podemos negar, por ello, que existe el riesgo de que se pueda realizar un mal uso de esa copia en aquellos supuestos que puedan afectar a la intimidad, menores, honor, etcétera. Por ello, en estos casos, que son, en definitiva, los mismos contemplados en el artículo 138, el tribunal puede acordar que no se grabe la vista o comparecencia, cuando pueda quedar comprometido alguno de los derechos citados y recogidos en el artículo 138 de la LEC, u otros análogos.

c). El artículo 187 regula expresamente el tema de la documentación de las vistas, del siguiente modo:

“1. El desarrollo de las vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o, si no fuera posible, sólo del sonido, conforme a los dispuesto en el artículo 147 de esta Ley. En estos casos, si el tribunal lo considera oportuno, se unirá a los autos, en el plazo más breve posible, una transcripción escrita de lo que hubiera quedado registrado en los soportes correspondientes.

Las partes podrán en todo caso, solicitar a su costa una copia de los soportes en que hubiera quedado grabada la vista.

2. Si los medios de registro a que se refiere el apartado anterior no pudieran utilizarse por cualquier causa, la vista se documentará por medio de acta realizada por el Secretario Judicial”.

Esta norma parece que matiza el contenido del artículo 147, ya que en este último recoge que las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, en cambio el artículo 187 indica que cuando no fuere posible la grabación y reproducción de la imagen sólo se verificará la del sonido. Además, en su párrafo 2º se señala que cuando los medios de registro no pudieran utilizarse la documentación de la vista se realizará mediante acta extendida por el Secretario Judicial, previsión que tampoco se recoge en las reglas generales de los artículos 146 y 147. La conclusión, con el juego de los anteriores preceptos, es que siempre que se pueda realizar mediante la grabación y reproducción del sonido y de la imagen se deberá proceder de este modo, utilizándose la cinta de vídeo o, en su caso, de grabación de sonido, por vista o juicio que se celebre, procediéndose por el Secretario Judicial una vez finalizado el acto al etiquetado con referencia expresa al procedimiento del que deriva. En los casos en que no sea posible con la imagen se realizará sólo mediante el sonido (siempre con la extensión de la correspondiente acta, pero sólo con el mínimo contenido recogido en la segunda parte del artículo 146.2); y, por último, en los casos en que no pueda verificarse ni tan siquiera mediante el sonido (ya que nunca podrá ser solamente mediante la imagen) se deberá documentar mediante un acta en la que se recoja con la necesaria extensión y detalle todo lo actuado (artículo 146.2 in limine).

Además, se prevé la posibilidad de que se efectúe una transcripción escrita de lo que hubiera quedado registrado en los soportes correspondientes (se entiende de la grabación del sonido), pero este caso parece que se reserva para los juicios complejos jurídicamente o que, de forma previsor, se crea necesaria su transcripción lo que nos lleva nuevamente al papel y escritura que padecen nuestros Tribunales.

Esta transcripción considero, hoy, no es necesaria pero el legislador ha seguido la jurisprudencia del TS (sentencias de 21 de febrero de 1991 en relación con la intervención telefó-

nica y lo mismo se sostiene en la STS de 7 de abril de 1995 respecto a la grabación magneto-fónica del juicio oral).

Coincidimos con SÁNCHEZ PARELLADA, en que la transcripción es una exigencia inútil en todo caso, pues no ofrece ninguna garantía añadida a la normal audición de una conversación telefónica o al visionado de una grabación.⁴⁴ Sólo criterios de oportunidad –o de comodidad– pueden justificar esa labor, pero con la certeza de que ello pone en peligro otros principios procesales, y aun incluso derechos fundamentales del justiciable, en particular, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. No es esencial reproducir por escrito lo que ya puede ser percibido por otros medios; lo que debe buscarse es la forma de asegurar que tales soportes no puedan ser objeto de manipulaciones y en el proceso estén en su integridad. Hecho esto, corresponde a los Jueces acostumbrarse a desarrollar su función utilizando otros medios distintos de la escritura y aprovechando todas las ventajas que ofrecen.

Por lo demás, la dificultad de transcripción de una grabación audiovisual se expresa con toda claridad en la SAP de Bilbao de 10 de enero de 1995, y es que *“lo que se ve se puede describir, pero no transcribir”*.

Afortunadamente, la innecesariedad de la transcripción se empieza a reconocer por el TS, incluso tratándose de conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía, como afirma en su sentencia de 25 de mayo de 2001: *“...no es preciso que se efectúen transcripciones por el Secretario de las cintas, pues garantizada su custodia, fueron oídas en directo por el Tribunal”*. En el mismo sentido, la sentencia de 25 de septiembre de 2000 advierte claramente que no se exige que las intervenciones telefónicas hayan sido transcritas y consten en la causa en un soporte diverso del originario de las grabaciones: *“tanto da a estos efectos que el Tribunal pueda leer dichos contenidos o que pueda escucharlos. La fuerza de convicción de estas pruebas no puede depender del sentido con el cual sean percibidas por los jueces”*.

Por su parte el artículo 146, en su primer apartado, nos indica que las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas, diligencias y notas. En su apartado segundo, establece que cuando la ley disponga que se levante acta se debe recoger en ésta, con la necesaria extensión y detalle, todo lo actuado, precisando seguidamente que: *“cuando se trate de las actuaciones que, conforme a esta Ley, hayan de registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción, el acta se limitará a consignar, junto con los datos relativos al tiempo y al lugar, las peticiones y propuestas de las partes y las resoluciones que adopte el tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte”*. Cosa totalmente lógica ya que si todo lo actuado ha quedado registrado en el soporte no es necesario que también quede reflejado en el acta, recogiendo solamente en ésta las precisiones reseñadas en el precepto y todo lo que no pueda constar en el documento electrónico.

La Fiscalía General del Estado, en su Circular nº. 1/2001, de 5 de abril, recoge las consideraciones del Ministerio Fiscal sobre la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento

⁴⁴ SÁNCHEZ PARELLADA, Jorge, “El acta del juicio oral en el proceso penal y las nuevas tecnologías”, Actualidad penal. Núm. 13, de 24 al 30 de marzo de 2003.

Civil cuando intervenga el Fiscal en los procesos civiles.⁴⁵ Concretamente en su apartado IV, bajo la rúbrica “documentación de las actuaciones procesales”, formula una serie de apreciaciones en orden a la aplicación de esta normativa. De este modo, considera en el párrafo 7º que el tenor de los anteriores preceptos (artículos 147 y 187) no contiene fórmulas optativas o alternativas relativas a la forma de documentación de las actuaciones procesales. El fundamento de estas afirmaciones se encuentra en los términos imperativos que utilizan estos preceptos (“se registrarán”, “conforme a esta ley, hayan de registrarse”). Añade, ya en su apartado 8º, que “se ha diseñado pues en la LEC un sistema de documentación de los actos procesales más ambicioso y perfecto que el que hasta ahora había venido siendo empleado”; sin embargo, la introducción de tales tecnologías “puede plantear problemas derivados de la negativa de las partes o de intervinientes en el proceso a ser objeto de filmación o grabación”. Hay que decir, efectivamente, que el anterior supuesto no figura en el articulado de la norma. Se ha planteado la cuestión de los límites de tan novedosa forma de documentación, sobre todo en casos en los que intervengan menores o en procesos relativos al estado civil. En este orden de cosas, en la circular se reconoce (en su párrafo 11º) la posibilidad de acudir, cuando existan razones que lo aconsejen, “a la documentación por medio de acta y no por medio de grabación”. Las razones alegadas por la Fiscalía y que abonan esta postura, son las siguientes:

- Debido a la falta de cumplimiento de las previsiones materiales recogidas en la Disposición Adicional 3ª y cuando se exima de los medios técnicos por no poder utilizarse “por cualquier causa” (artículo 187.2 LEC/2000) o cuando se trate de supuestos que permiten la exclusión de la publicidad de la audiencia, la documentación se efectuará mediante acta. Los actos procesales así documentados van a tener los mismos efectos que los documentados de otro modo.
- En este caso se limita el alcance del artículo 24.1 CE que recoge el derecho de los pleiteantes a un proceso público, con los supuestos previstos en el artículo 138 de la norma procesal civil (orden público, de protección de la seguridad nacional en una sociedad democrática, de salvaguardia de los intereses de los menores, de protección de la vida privada de las partes, o, en definitiva, por la concurrencia de especiales circunstancias apreciadas por el Tribunal).
- Que la exclusión de la grabación debe basarse en un motivo con justificación suficiente, ya que sólo de este modo se podrá paliar que se limite la documentación del acto a la forma escrita, siempre que permita a los litigantes obtener constancia suficiente de lo actuado que asegure su derecho de defensa. Si no concurre razón excluyente válida deberá documentarse la vista o comparecencia por medio de la grabación.

El contenido de esta circular pone de manifiesto el interés del Ministerio Fiscal para que sean utilizados en las vistas o comparecencias en las que intervenga del orden jurisdiccional civil, como medio de documentación, los medios técnicos previstos en la LEC/2000.

Aunque también, de acuerdo con las funciones que constitucionalmente le son encomendadas (artículo 124 CE), promueve que sean aplicadas las normas que limitan la publicidad e intimidad en ciertos supuestos o en situaciones con una justificación suficiente (una de ellas es la falta de medios materiales), siendo en estos casos cuando se efectuará la documentación mediante acta.

Por otro lado y volviendo al artículo 146, en su párrafo tercero, se recoge la posibilidad —cada vez más extendida a través de la progresiva implantación del Programa Libra a la totalidad de los órganos judiciales— de que se empleen medios técnicos de documentación y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que se recibieren, siempre con las garantías, que ya tuvimos ocasión de analizar en un apartado anterior, a que se refiere el artículo 135 de esta Ley. Además, también se podrán emplear medios técnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estadística relativa a éstos. A todo ello hay que añadir, conforme a las previsiones recogidas en apartados anteriores, los grandes beneficios que aporta la informatización de los órganos judiciales con respecto a la celeridad en la tramitación de los procedimientos y a la seguridad de los datos que se ofrece con el establecimiento de las directivas o protocolos precisos.

El artículo citado contempla, como hemos visto, la forma de “documentar” las actuaciones judiciales a través de tres tipos: “actas, diligencias y notas”; pues bien, en el apartado segundo del precepto, se prevé expresamente, con relación a las actas judiciales, el “registrar” en “soporte apto” lo esencial del documento judicial mediante medios técnicos que sean susceptibles de “grabación y reproducción”.

Sin embargo, el apartado siguiente, es decir, el tercero, es el que realmente tiene mayor incidencia en esta materia, ya que expresamente reconoce la facultad de los tribunales de justicia de “documentar y archivar”, tanto las actuaciones judiciales como “los escritos y documentos que recibieren” por estos medios técnicos, en estricto cumplimiento y desarrollo del apartado primero del artículo 230 de la LOPJ ya comentado; en este sentido, el legislador se remite, igualmente a las “garantías” que venían contempladas en el “apartado quinto del artículo 135 de esta Ley”, es decir, que queden garantizadas la “autenticidad e integridad fehaciente” de los documentos judiciales así “documentados y registrados”.

Acudiendo a las normas que informan la ejecución forzosa y las medidas cautelares, y concretamente en lo referente a “la garantía de la traba de bienes muebles y derechos”, en relación con la diligencia de embargo, en el artículo 624 LEC/2000 figura la posibilidad de que se utilicen los medios de documentación gráfica o visual de que el Juzgado disponga o le facilite cualquiera de las partes para su mejor identificación. Como ocurría con las vistas o comparecencias, si se dispone de estos medios técnicos el acta solamente tendrá un contenido sucinto, en cambio si solamente se extiende el acta, ésta deberá poseer un contenido detallado. Por otro lado, si al litigante le interesa que la diligencia se recoja por estos medios y el órgano judicial carece de ellos, deberá ser el interviniente el que deberá proveer de estos medios técnicos y, en su caso, de persona que los maneje.

Por lo que respecta a la garantía del embargo de inmuebles y de otros bienes susceptibles de inscripción, el artículo 629.1 del mismo cuerpo legal establece que el mismo día de su expedición se remitirá mandamiento por fax desde el tribunal al Registro de la Propiedad, donde se extenderá el correspondiente asiento de presentación. Cuestión que necesitaba esta

⁴⁵ Boletín de Información del Ministerio de Justicia. “*Circulares, instrucciones y consultas de la Fiscalía General del Estado (2001)*”. Suplemento al nº. 1912, de 1 de marzo de 2002. Págs. 927 a 972. (Apartado IV: documentación de las actuaciones procesales. Págs. 933 a 936.)

regulación sobre la base del principio que rige el acceso al Registro de la Propiedad *"prior tempore posterior iure"* (primero en el tiempo, preferido en el derecho), ya que trabas efectuadas en una fecha posterior tenían acceso al registro con anterioridad, con los perjuicios derivados por el orden de preferencia derivado de la fecha de inscripción de la carga sobre el bien concreto.

En referencia a las comunicaciones a los titulares de derechos posteriormente inscritos, el artículo 660 indica que las comunicaciones se practicarán en el domicilio que conste en el Registro, por correo o telégrafo con acuse de recibo o por otro medio fehaciente (que pueden ser perfectamente el fax o incluso el correo electrónico, pero siempre con las precauciones y garantías acreditativas de que ha sido recibido).

Y en los supuestos de subasta simultánea, en virtud del artículo 673 *"... el tribunal ejecutor no aprobará el remate hasta conocer, por cualquier medio de comunicación, las (...)"*; añadiendo que *"... si dicho empate no hubiese podido salvarse mediante comunicación telefónica, o de cualquier otra clase (...)"*.

En definitiva, todos estos preceptos no hacen sino corroborar la apuesta decidida del legislador para que los órganos judiciales utilicen todos los medios técnicos a su alcance para el desarrollo habitual de sus funciones.

d). Finalmente el artículo 148 LEC/2000 apunta que la formación, custodia y conservación de los autos es responsabilidad del Secretario Judicial, salvo el tiempo en que estuvieren en poder del Juez o del Magistrado ponente u otros Magistrados integrantes del tribunal. Consecuentemente, los documentos electrónicos (como el disquete, el cederrón,...), al no poderse unir físicamente al procedimiento deberán quedar en poder de dicho funcionario en el lugar destinado al efecto, dejándose constancia en los autos mediante diligencia en la que se harán constar dichos extremos.

3.2.4. Los actos de comunicación judicial y la remisión de oficios, mandamientos y exhortos por medios electrónicos, informáticos o similares.

En la LEC, el capítulo V del título V del libro I se titula "De los actos de comunicación" y abarca los artículos 149 a 168. El capítulo VI trata "Del auxilio judicial" y comprende los artículos 169 a 177 y a los que, desde nuestro punto de vista, tienen más que ver con las nuevas tecnologías, centraremos nuestras reflexiones siguientes.

Los tipos de actos procesales de comunicación de los órganos jurisdiccionales se hallan relacionados en el artículo 149 LEC/2000, a saber: notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios. Cada uno de ellos con unos requisitos de contenido material y formal detallados en los preceptos siguientes de la misma norma procesal.

3.2.4.1. La forma de los actos de comunicación: la utilización de medios técnicos.

Los requisitos de forma se encuentran en el artículo 152, del que podemos destacar el apartado 1.2ª, el cual establece como una de las formas para su práctica:

"Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado".

Queda patente el carácter totalmente abierto a la hora de elegir la forma de remisión, que puede ser mediante fax, el correo electrónico o cualquier otro medio telemático, con el único requisito de que quede constancia fehaciente en autos de que se ha remitido, su recibo, la fecha y el contenido del acto comunicado. Cuestiones de las que debe dar fe el Secretario Judicial, al realizarse el acto de comunicación bajo su dirección con la responsabilidad de la adecuada organización del servicio (artículo 152.1).

En estos supuestos nos referimos a los casos en los que los destinatarios de la comunicación aún no se hallen personados o no representados por Procurador, ya que si fuera así esta actuación se efectuaría con ese representante procesal (artículo 153). Cuando las partes no actúen representadas por Procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes (artículo 155.1), no descartándose, al utilizar la misma palabra "remisión", los medios indicados en el artículo 152.1.2ª.

Pero esa elección, en principio, queda supeditada a los datos que se faciliten en la demanda, siendo el artículo 155.2. 2º párrafo el que establece que *"el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax o similares."* Dentro el concepto "similares" perfectamente cabe la dirección de correo electrónico.

Se ha indicado que el medio que se utilice debe permitir dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado (152.1.2ª). En cambio, el artículo 155.4, primer párrafo, parece que desvirtúa la anterior taxatividad, al recoger que:

"Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior (domicilio que aparezca en el padrón municipal, en Registros oficiales, publicaciones de Colegios profesionales, el lugar donde se desarrolle la actividad profesional o laboral no ocasional), que se hayan designado como domicilios, surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario".

El anterior precepto asume "la teoría de la remisión", es decir, que el acto de comunicación procesal se entenderá válidamente practicado si se ha remitido de forma correcta aunque no conste la recepción por el destinatario. En cambio, el artículo 152.1.2ª acoge "la tesis de la recepción", ya que debe constar fehacientemente la recepción, fecha y contenido de lo comunicado. Además el artículo 152, como otras formas de realización de dichos actos, solamente indica que será a través del Procurador cuando estén personados (apdo. 1.1ª) o mediante entrega al destinatario (apdo. 1.3ª). Cuestión que en la práctica da lugar a distintas interpretaciones.

La excepción a los anteriores supuestos viene dada en el propio artículo 155, apartado 4. 2º párrafo, al establecer que:

“No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158”.

A su vez este artículo 158 regula la comunicación mediante entrega en los casos previstos en el apartado 1 del artículo 155 que, como recordamos, regula la remisión al domicilio en los supuestos de falta de personación o cuando se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, fijando que la forma de la entrega se realizará en la forma establecida en el artículo 161. Este último precepto articula la forma de practicar la citación por medio de entrega de copia de la resolución o de cédula, es decir, la entrega personal al destinatario o, en su defecto, a las personas que se indican en el apartado 3 del mismo precepto. Cabe destacar también el párrafo 4º de este mismo artículo 161, en el cual se apunta el caso de no hallarse a nadie en el domicilio y que consiste en realizar in situ las averiguaciones pertinentes y que en el supuesto de ofrecer un resultado infructuoso se consignará en la diligencia negativa que se extienda. Cuando se obtiene el anterior resultado debemos acudir a lo que establece el artículo 156, en el cual se indican las averiguaciones que se deben practicar para hallar el domicilio o residencia del demandado, pudiendo el tribunal dirigirse a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155, y que, averiguado del domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación de la segunda forma establecida en el apartado 1 del artículo 152 que, como recordamos, establece la remisión del acto de comunicación mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico, pero con los requisitos de que quede constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado; añadiéndose que es de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 158, esto es, la comunicación mediante entrega en los casos que tuvimos ocasión de relacionar anteriormente. En cambio, si las averiguaciones han dado resultado infructuoso o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a los artículos anteriores, o cuando se acuerde de conformidad con el apartado 2 del artículo 157 (comprobación del contenido del Registro Central de Rebeldes Civiles, regulado mediante Real Decreto 231/02, de 1 de marzo⁴⁶), como último recurso el artículo 164 establece la comunicación edictal.

De este modo, ese mandato para practicar el acto de comunicación mediante entrega puede tener también el escollo de que la parte no haya facilitado correctamente, en este caso con mala fe, el domicilio correcto del destinatario, lo cual si se une a la falta de diligencia del órgano judicial en realizar las averiguaciones correspondientes, puede provocar una indefensión al no poder comparecer en el proceso en ese momento. A este sistema garantista de la entrega, lo podemos complementar con todos los medios electrónicos de que se dispongan para garantizar dicha comunicación, como mínimo para ponerle en conocimiento de que debe comparecer ante el tribunal para hacerle entrega personal del emplazamiento.

3.2.4.2. Especial referencia al artículo 162 LEC/2000.

El artículo 160, en su primer apartado, que tiene el título de “remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes”, en su apartado primero describe, con mayor extensión, qué se entiende por tales “medios semejantes”, del siguiente modo:

“1. Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de su contenido, el Secretario dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquellos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción.”

La norma más importante en este contexto es el artículo 162⁴⁷, cuya rúbrica es “actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares” y que da título al apartado que estamos desarrollando, y que además es de contenido similar a los artículos 135 y 136 ya vistos anteriormente y con una relación directa con el artículo 152.1.2ª. El contenido de este precepto es del siguiente tenor literal:

“1. Cuando los Juzgados y tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permita el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda.

Las partes, y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.

2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, aquéllos habrán de aportarse o transmitirse a las partes o interesados de modo adecuado a dichos procedimientos o en la forma prevista en los artículos anteriores, con observancia de los requisitos de tiempo y lugar que la ley señale para cada caso.”

Varias son las consideraciones que merecen ser destacadas:

- El primer requisito que fija el precepto es que el órgano judicial y el receptor (los litigantes u otros destinatarios) dispongan de estos medios. El artículo 162 permite, no impone, el uso de los medios electrónicos.

⁴⁶ BOE núm. 65, de 16-3-02

⁴⁷ Este artículo no tiene precedente en la LEC anterior. Trata de la posibilidad de utilizar medios electrónicos, informáticos y similares siempre que sean poseídos por los órganos judiciales y las partes o los profesionales y haya medios de garantizar la autenticidad de la comunicación y recepción.

- El carácter totalmente abierto a cualquier canal para que se verifique la comunicación, al indicar que podrán ser medios electrónicos, telemáticos, infotelemáticos, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de la comunicación.
- Estos mecanismos deberán ser compatibles. Cuestión que no merece más precisiones ya que generalmente los medios electrónicos o informáticos actuales lo son.
- Introduce una regla tendente a la seguridad jurídica, tanto por lo que respecta a la formación misma del procedimiento como en el contenido de lo que se comunica, cuestiones que redundan en la salvaguardia de la tutela judicial efectiva, ya que se debe garantizar la autenticidad, el contenido, la constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y el momento en que se hizo la comunicación.
- Se dirige un mandato a las partes y profesionales al indicar que "... *deberán comunicar el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección...*". El momento adecuado es en la demanda, en la contestación a la misma o en la reconvención o, en su caso, en la personación del Procurador. Se trata de una regla que tiende a agilizar la tramitación del procedimiento, evitándose con este sistema remisiones por correo que lo único que hacen es dilatar innecesariamente la finalización del expediente. Todo esto no excluye que el órgano judicial pueda averiguar por otros cauces los medios y dirección de que disponen los postulantes en un proceso concreto y remitirlos por dichos cauces la comunicación pertinente.
- Se prevé la constitución de un Registro en el Ministerio de Justicia accesible electrónicamente y con las direcciones correspondientes, lo que también facilitará a los interesados su conocimiento, incluso con antelación a la presentación de la demanda, y en un futuro próximo podría presentarse la demanda o incluso proceder al primer emplazamiento o citación, si se conoce la "dirección electrónica" del destinatario, por alguno de los medios telemáticos expuestos.

Finalmente, el apartado segundo, del mismo modo como lo hace en su ámbito el artículo 135.5. 2º párrafo, ordena una "regla de acreditación posterior o de remisión por un procedimiento determinado" en los casos en que sea necesario aportar el original, tanto para su incorporación al procedimiento como para que llegue a su destinatario, al ser preciso su examen directo o que sea necesaria dicha remisión por otros procedimientos o en la forma prevista en los artículos anteriores, como puede ser la comunicación mediante entrega. En todo caso con el cumplimiento de los requisitos de tiempo y lugar que la ley señala para cada caso, atendiéndose a las reglas especiales que se recojan para supuestos concretos.

¿Qué consecuencias acarreará la práctica de un acto de comunicación sin la observancia de las previsiones de este Capítulo V?

Para responder a esta cuestión hay que acudir al artículo 166, conformado por dos apartados. En el primero de ellos se recoge la nulidad radical del acto del siguiente modo:

"1. Serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo y pudieren causar indefensión".

Por tanto, no basta que no se hayan cumplido todos los requisitos establecidos para su práctica, sino que además esa inobservancia pudiera causar indefensión, no siendo preciso que realmente tenga lugar la misma en ese momento.

Por su parte, el apartado 2º nos ofrece una regla de subsanación:

"2. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada en el asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el tribunal, surtirá desde entonces todos sus efectos, como si se hubiere hecho con arreglo a las disposiciones de la Ley".

De este modo, en principio los actos son nulos, pero quedan sanados por la actuación de la persona a la que va dirigido el acto de comunicación. Sin perjuicio de la corrección disciplinaria por la responsabilidad de los funcionarios y profesionales, además de la derivada por los daños y perjuicios que se ocasionen.

3.2.4.3. *La remisión de oficios y mandamientos por medios técnicos.*

En virtud del artículo 167, los oficios y mandamientos que expida el tribunal se podrán remitir directamente a la autoridad o funcionarios a los que vayan dirigidos, por los medios previstos en el artículo 162 (medios electrónicos, informáticos o similares), aunque si lo solicita el litigante a cuya instancia se libren podrá diligenciarlos personalmente, satisfaciendo éste, en todo caso, los gastos que requiera su cumplimentación.

La utilización del fax por los tribunales en su funcionamiento diario es más habitual, pero no lo es tanto la utilización de otros medios electrónicos o telemáticos.

Ejemplo paradigmático es la Resolución de 28 de julio de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 27 de mayo de 1998, en materia de cesión de información tributaria por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a Juzgados y Tribunales.⁴⁸

En el comienzo del punto I de su exposición de motivos, ya recoge estas importantes ideas:

"Para lograr una eficaz tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos, los juzgados y tribunales precisan cada vez más acceder a ciertos datos de naturaleza patrimonial que están en poder de la Administración tributaria, obtenidos a su vez de los ciudadanos en virtud del cumplimiento por éstos de deberes legales de naturaleza tributaria.

El armónico equilibrio entre los diferentes derechos e intereses en juego en estos asuntos (tutela judicial efectiva, derecho a la intimidad, protección frente al uso indebido de la informática, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, deber de colaboración con la justicia, la confianza

⁴⁸ BOE 187, de 6 de agosto de 1998.

legítima, la eficacia de la actuación administrativa,...) plantea interesantes y complejos problemas a la hora de articular la colaboración de la Administración Tributaria con los jueces y tribunales de justicia”.

A fin de garantizar este nuevo cauce formal de comunicación entre las Administraciones Tributaria y de Justicia, se crearon dos órganos de conexión:

- **Las oficinas de investigación patrimonial.** Que fueron creadas en el ámbito de la Admón. de Justicia, como consecuencia de la firma de anterior Convenio de 27 de mayo de 1998 y conectadas con la base de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
- **De justicia las oficinas de comunicación con los juzgados y tribunales.** Constituidas mediante la Resolución de 23 de junio de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crean las Oficinas de Comunicación con los Juzgados y Tribunales de Justicia en el ámbito de las Delegaciones de la Agencia y se regula su funcionamiento.⁴⁹

El objeto de estas oficinas, como muy bien indica su denominación, es la obtención de información patrimonial, del domicilio y otros datos personales que son necesarios para el proceso en cumplimiento de una resolución firme.

Su dependencia orgánica se halla regulada en el Reglamento Orgánico 4/95, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, aprobado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995, reformado parcialmente por el Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del CGPJ, por el que se aprueba el Reglamento 1/2000, de los órganos de Gobierno de los Tribunales.⁵⁰

A fin de aumentar las posibilidades de interconexión telemática en fecha 10 de mayo de 2000 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de los Registros y del Notariado, relativo a la interconexión informática del Registro de Vehículos y el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad, en fecha 13 de noviembre de 2000, se firmó una adenda al referido convenio por la que se adhirió al mismo el Consejo General de Poder Judicial.

La interconexión informática a la que se refiere el mencionado convenio despliega sus efectos desde el día 1 de abril de 2001, lo que ha permitido la plena aplicación de las previsiones contenidas en las siguientes normas:

La Disposición Adicional Única del Real Decreto 1828/99, de 3 diciembre, sobre Condiciones Generales de la Contratación. Mediante el cual se creó el Registro de Bienes Muebles, donde se practican las anotaciones de embargo y de demanda sobre dichos bienes.

Y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

El incremento de la colaboración y su canalización a través de unos órganos concretos facilita y agiliza el trasvase de una información que es relevante en un cierto proceso, aunque no impide que el propio órgano judicial se pueda dirigir directamente a cualquier organismo o autoridad de forma electrónica o telemática.

3.2.4.4. *El auxilio judicial: el envío de exhortos.*

El Capítulo VI del Título V de la LEC/2000, con la denominación “del auxilio judicial”, regula en el ámbito procesal civil la colaboración obligada entre órganos jurisdiccionales cuando se deban prestar auxilio para la práctica de las actuaciones que hayan de efectuarse fuera del término municipal o de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto (artículo 169), con las matizaciones y excepciones que recoge este mismo precepto para ciertos actos concretos. Este régimen no es más que una concreción de las normas, que con carácter general lo informan, recogidas en los artículos 273 a 278 de la LOPJ.

Precisa la norma procesal civil que esta solicitud se realiza mediante exhorto, que debe comprender los requisitos formales expresados en el artículo 171. Nos interesa especialmente el contenido del artículo 172 respecto a la forma de remisión de este despacho, cuya regla general está en su apartado 1:

“1. Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción.”

Enunciado que recuerda el de los ya examinados artículos 135 y 162 de la misma ley rituaría, remitiéndonos a las precisiones que efectuamos y que damos por reproducidas. Simplemente añadir que el sistema de remisión es indiferente, aunque en primer lugar indica el sistema informático judicial no citado expresamente en los preceptos antes indicados, al hablar en este caso de la comunicación directa entre dos órganos judiciales en los que si se le ha implantado efectivamente este sistema debe ser preferible a otro medio. Pero también sabemos este sistema está en vías de implantación, careciendo del mismo sobre todo los Juzgados de Paz.

Igualmente a la precisión del artículo 167 respecto a los oficios y mandamientos, en este caso los apartados 2 y 3 del propio artículo 172 indican la posibilidad de que al interviniente que interese el cumplimiento le sea entregado bajo su responsabilidad para que lo presente ante el órgano de destino.

Con referencia a la devolución del exhorto una vez cumplimentado, el artículo 175.1 recoge que se comunicará al exhortante por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción (es de idéntico contenido al 172.1). Sin perjuicio, según prevé el 2º apartado, de que las actuaciones practicadas se remitan por correo certificado o se entreguen al portador, debiendo este último presen-

⁴⁹ BOE 201, de 22 de agosto de 1998.

⁵⁰ Este Acuerdo fue adoptado por el Pleno del CGPJ, en fecha 7 de junio de 1995, y en el que se aprobaron otros Reglamentos. Publicado en el BOE 166 de 13 de julio; corrección de errores en BOE 44, de 20 de febrero de 1996. La publicación del Acuerdo 1/2000, se efectuó en el BOE de 8 de septiembre; corrección de errores BOE 237, de 3 de octubre.

tarlo al órgano exhortante en los diez días siguientes. Comprobamos que a pesar del uso de medios informáticos o electrónicos para su remisión y recepción, la Ley no elimina la necesidad de que se unan físicamente las actuaciones a los autos (escritos, documentos y actuaciones procesales), es decir, la formación documentada de los autos en soporte de papel no se elimina a pesar del uso de las nuevas tecnologías.

A propuesta del vocal Fernando FERNÁNDEZ, el Consejo General de Poder Judicial ha aprobado la constitución de un sistema informático de intercambio de documentos judiciales, denominado "inter-ius", que conectará a todos los juzgados españoles y que agilizará las notificaciones y el cumplimiento de exhortos, y el establecimiento de un canal de comunicación seguro, con soporte en el denominado "Punto Neutro Judicial".⁵¹

Los artículos comentados arbitran la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, concretamente el correo electrónico, para el auxilio judicial, el 172 para la remisión de exhorto, y el artículo 175 para la devolución, pero también es cierto que la **videoconferencia podría evitar el auxilio judicial**, tal y como lo regula el artículo 169 y ss de la LEC, y ser sustituido por videoconferencia.

El uso del correo electrónico producirá una agilización de los exhortos, pero también es cierto que el uso de la videoconferencia lo optimizará.

La videoconferencia potenciará que todo el juicio se celebre a presencia del juez que va a dictar sentencia, al facilitar el principio de inmediación del artículo 137 de la LEC, con la "inmediación virtual", pues evitará que por razón a la distancia le pueda ser gravoso a las partes, testigos o peritos acudir a la sede del órgano judicial en donde se sigue el juicio, por lo que el sistema de videoconferencia hará posible lo dispuesto en el artículo 169.4, de forma real y efectiva, como es el espíritu de esta norma relacionada con la inmediación.

Para la videoconferencia necesitamos medios técnicos en el punto de recepción donde se sigue el juicio y en la sede del órgano judicial correspondiente al domicilio del perito o testigo, por lo que las partes deben advertir, con la antelación suficiente, esta posibilidad para que el órgano judicial pueda disponer lo necesario para utilizar la videoconferencia. En el juicio ordinario, como la prueba se propone en la audiencia previa al juicio, es más sencilla que en el verbal su utilización, teniendo en cuenta que cuando las partes estén haciendo uso de lo previsto en el artículo 429, para proponer prueba, deberán hacer constar que solicita el uso de la videoconferencia para la práctica de las pruebas interesadas, de tal manera que el juzgado tendrá tiempo necesario para coordinar, por medio del correo electrónico que admite el artículo 172, todo el sistema, y utilizar la videoconferencia el día señalado para el juicio.

El auxilio judicial bajo el sistema de videoconferencia ya ha sido tratado con anterioridad e incluso hemos dejado constancia de que las ventajas son indudables, la videoconferencia posibilita la comunicación de imagen y sonido en tiempo real entre dos puntos distantes, creando una "reunión virtual" en la que la distancia física deja de ser un impedimento para la celebración de encuentros, como si los participantes se encontrasen en la misma sala.

⁵¹ Diario de Noticias La Ley, 28/02/03.

Recapitulando, la LEC/2000 realiza una diferenciación entre:

- La comunicación que se debe remitir a quienes no estén personados con Procurador y se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, o la realización o intervención personal en determinadas actuaciones procesales, que se realizarán por remisión al domicilio de los demandados siempre que pueda acreditarse que el destinatario ha recibido la comunicación, todo ello en aras a no producir indefensión. En los casos en que no quede acreditado el recibo de la comunicación se realizará ésta mediante entrega de copia de la resolución o de cédula (artículos 155.4, 2º párrafo, 158 y 161); pero no se excluye la utilización de medios técnicos (electrónicos, informáticos y similares -artículo 162-) cuando se pueda acreditar la recepción, en virtud del contenido del artículo 155.1 en relación con el artículo 152.1.2ª.
- Cuando la remisión se efectúe a cualquiera de los lugares previstos en el apartado 3 del artículo 155, designados como domicilio y cuando el interesado no estuviese representado por Procurador, surtirán plenos efectos con la correcta remisión aunque no conste su recepción por el destinatario. De estos supuestos habrá que excluir, debido a su trascendencia procesal, los señalados en el apartado anterior.
- Las comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el juicio (artículo 159), se realizarán por remisión a través de correo, telegrama u otros medios semejantes (artículo 160) y en el caso de que fracase la comunicación o las circunstancias del caso lo aconsejen, el tribunal ordenará que se proceda a la comunicación por medio de entrega (artículo 161).
- También se pueden utilizar los medios técnicos previstos en el artículo 162 para la remisión de oficios y mandamientos a funcionarios y autoridades, así como para la remisión y recepción de exhortos (artículos 172 y 175), aunque en estos casos al indicarse expresamente el sistema "informático judicial" parece que debe ser preferible este método al tratarse de una comunicación entre dos órganos jurisdiccionales.

3.3. La Ley de Procedimiento Laboral

Con respecto a esta norma procesal, en su Disposición Adicional primera, primer apartado, establece que en lo no previsto en la LPL regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil, por tanto hay que completar sus previsiones conforme a la ley procesal civil.

Como consecuencia de la anterior previsión, las normas que aluden al documento electrónico como medio para documentar los actos procesales son más reducidas, no obstante cabe destacar:

Artículo 45.1: "La presentación de escritos o documentos el último día de un plazo, podrá efectuarse ante el Juzgado de Guardia de la sede del Juzgado o Sala de lo Social competente, si tiene lugar en horas en que no se halle abierto el Registro de entrada de dichos órganos. A tal efecto se habrá de expresar la hora en la oportuna diligencia de presentación en el Juzgado de Guardia,

debiendo el interesado dejar constancia de ello en el Juzgado o Sala de lo Social al día siguiente hábil, por el medio de comunicación más rápido.”

Artículo 53.1: “Los actos de comunicación se efectuarán en forma que se garanticen el derecho a la defensa y los principios de igualdad y de contradicción. Habrán de practicarse por los medios más rápidos y eficaces que permitan su adecuada constancia y las circunstancias esenciales de la misma.”

Artículo 56.4: “Se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafo o por cualquier otro medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos si los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptarán las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos.”

Artículo 89.3: “El acta del juicio podrá ser extendida también a través de medios mecánicos de reproducción del mismo. En tal caso, se exigirán los mismos requisitos expresados en el número anterior.”

3.4. La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Del mismo modo, esta norma procesal también configura la supletoriedad de la LEC/2000, al recoger en su Disposición Final Primera, que: “En lo no previsto por esta Ley, regirá como supletoria la de Enjuiciamiento Civil.”

Aunque esta norma rituaría es aun más simplificada que la laboral con referencia al documento electrónico. Esta apreciación, a efectos prácticos, no tiene mayores consecuencias ya que para completarla acudiremos a las previsiones generales de la LEC/2000.

Solamente destacaremos una mención expresa al documento electrónico con respecto al tema que nos ocupa, concretamente al artículo 78.22.2º párrafo, cuyo tenor literal es el siguiente: “El acta del juicio podrá ser extendida también a través de medios mecánicos de reproducción. En tal caso, se exigirán los mismos requisitos expresados en el apartado anterior.”

3.5. La Ley de Enjuiciamiento Criminal

En esta norma procesal también encontramos ejemplos en los que queda patente la utilización de medios electrónicos para la formación del procedimiento.⁵² Por ejemplo, destaquemos los siguientes preceptos.

LIBRO IV: DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. TÍTULO II “DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO”:

Capítulo II: De las actuaciones de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal.

Artículo 770. 5ª

“La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes diligencias:

...5ª. Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número de fax o dirección de correo electrónico.”

Capítulo III: Diligencias Previas.

Artículo 777.

“1. El Juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, dando cuenta al Ministerio Fiscal de su incoación y de los hechos que la determinen. Se emplearán para ello los medios comunes y ordinarios que establece esta Ley, con las modificaciones establecidas en el presente Título.

2. Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima, o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el Juez de Instrucción practicará inmediatamente la misma, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario judicial, con expresión de los intervinientes.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los términos del artículo 730.”

Capítulo V: Del Juicio Oral y de la Sentencia.

Artículo 788.6

“Del desarrollo del juicio oral se levantará acta que firmarán el Juez o el Presidente y Magistrados, el Secretario, el Fiscal y los abogados de la acusación y la defensa, reseñándose en la misma el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas, pudiendo completarse o sustituirse por cualquier medio de reproducción mecánica, oral o escrita, de cuya autenticidad dará fe el Secretario.”

En cambio, el artículo 743 (En el ámbito del Sumario: Libro III “Del Juicio Oral”, Capítulo IV “De la acusación, de la defensa y de la sentencia”) establece por su parte que:

“El Secretario del Tribunal extenderá acta de cada sesión que se celebre, y en ella hará constar sucintamente cuanto importante hubiere ocurrido.

Al terminar la sesión se leerá el acta, haciéndose en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si el Tribunal en el acto las estima procedentes.

Las actas se firmarán por el Presidente e individuos del Tribunal, por el Fiscal y por los defensores de las partes”.

⁵² Fundamentalmente en la redacción que da, a los siguientes arts., La Ley 38/2002 (BOE 28/10/2002).

En este último supuesto no se recoge expresamente la posibilidad que indica el artículo 788.6, es decir, que pueda completarse el acta por medio de reproducción mecánica, oral o escrita.

La S. 494/95, de 7 de abril, estima que “para que el contenido de las grabaciones adquiera valor analógico al acta, será preciso que se hubiera hecho una transcripción mecanográfica de cada sesión y se hubiera firmado por todos dando fe el Secretario”.

Podemos concluir que, adoptando todas las precauciones posibles al tratarse de materia penal, con la interpretación conjunta de los dos preceptos y que el ámbito penal también se beneficia de la modernización en el ámbito de la Administración de Justicia, nada obsta para que en cualquier caso, ya sea en el supuesto del Sumario o del Procedimiento Abreviado, se puedan utilizar medios mecánicos, informáticos o digitales para la grabación de las sesiones, sin perjuicio de que se extienda al propio tiempo un acta con el contenido mínimo que se precise.

TÍTULO III:

Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos

Capítulo II: De las actuaciones de la Policía Judicial

Artículo 796.3

“Si la urgencia lo requiriere, las citaciones podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta.”

Capítulo III: De las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia

Artículo 797.2

“Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el Juez de guardia practicará inmediatamente la misma asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario Judicial, con expresión de los intervinientes.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los términos del artículo 730.”

Lej Orgánica, 13/2003 de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.⁵³

El artículo cuarto añade un nuevo párrafo al artículo 306 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el siguiente contenido:

⁵³ Boletín Oficial del Estado de 27 de octubre de 2003.

“Cuando en los órganos judiciales existan los medios técnicos precisos, el Fiscal podrá intervenir en las actuaciones de cualquier procedimiento penal, incluida la comparecencia del artículo 505, mediante videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido”.

Se da contenido al artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con este contenido:

“El Juez, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte particularmente gravosa o perjudicial, podrá acordar que la comparecencia se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Se añade un nuevo artículo 731 bis de la LECR.

“El Tribunal de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

La disposición adicional de esta Ley, adiciona al artículo 229 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, un nuevo apartado tercero con el siguiente contenido⁵⁴:

“3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en toda caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el Juez o Tribunal.

En estos casos, el Secretario Judicial del Juzgado o Tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo”.

Esta normativa deja claro muchos conceptos sobre la utilización de la videoconferencia en los actos procesales y deja sin efecto todos los recelos y tendencia al rechazo inicial del Fiscal General del Estado contenidos en la Instrucción 1/2002, de 7 de febrero, en el caso práctico

⁵⁴ Artículo 229.l. Las actuaciones judiciales será predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su documentación. 2. Las declaraciones, confesiones en juicio, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante Juez o Tribunal con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley.

"Videos en la Justicia".⁵⁵ La postura inicial ha sido matizada por la Instrucción 3/2002, de 1 de marzo, en la que se especifica que el criterio general para el uso de la videoconferencia en las actuaciones procesales es el de posibilidad, señalado en el artículo 230.1 LOPJ concretando algunos actos procesales que pueden celebrarse a través de la videoconferencia dentro del marco jurídico vigente.⁵⁶

Según la Instrucción 3/2002, algunas de las principales utilidades procesales de la videoconferencia dentro del marco jurídico vigente podrían ser las siguientes:

- Complemento del auxilio judicial, nacional e internacional, con mayor cumplimiento del principio de intermediación.
- Declaración de testigos y peritos evitando los desplazamientos
- Protección de la libre y espontánea declaración de personas
- Disminución de traslados desde Centros Penitenciarios, disminuyendo los riesgos de fuga.

Tenemos ejemplos en derecho comparado: Italia, la Ley núm. 11, de 7 de enero de 1998, condiciona el empleo de medios técnicos que garanticen la audiencia a distancia. Más recientemente la Ley francesa de 15 de noviembre de 2001 ha llevado a cabo una modificación del Code de Procédure Penal, aceptando la utilización de la videoconferencia.

Por otra parte, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en Roma el 17 de julio de 1998, incorpora entre sus previsiones algunos preceptos que abren la puerta a la práctica de los actos procesales conforme a las nuevas tecnologías (artículos 62, 63 y 68).

Por otra parte, recordemos que en el proceso penal español, el último párrafo del artículo 448 de la LECrim. dispone que "...cuando el testigo sea menor de edad, el Juez, atendiendo a la naturaleza del delito y las circunstancias de dicho testigo, podrá acordar en resolución motivada y previo informe pericial que se evite la confrontación visual del testigo con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que hagan posible la práctica de esta prueba..."; y el artículo 707 segundo párrafo LECrim. contiene idéntica redacción.

3.6. La Ley Orgánica 19/2003, de Reforma de la LOPJ

Terminaremos con la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ, que en la misma línea de impulsar un proceso digitalizado introduce, entre las funciones de los Secretarios Judiciales, párrafo 3º del artículo 454 de la LOPJ, la obligación de⁵⁷:

"promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con que cuente la Unidad donde preste sus servicios". El artículo 453.1.2º párrafo, establece que *"cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, el Secretario Judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido".*

Igualmente se establece, por esta reforma, le llevanza de los libros registro a través de aplicaciones informáticas, que la estadística se facilite a través del sistema tecnológico que se habilite al efecto y que se introduzcan los sistemas y aplicaciones necesarios para configurar cauces de comunicación e interconexión seguros (artículos 458 y 461).

4. CONSIDERACIONES FINALES

He intentado analizar las más importantes normas que regulan el documento electrónico, en la administración de justicia, como soporte para la documentación de los actos procesales, pero también he dejado constancia de su circulación por lo que desde 1990 queda definida como "la red de redes"⁵⁸, es decir por Internet, con la que llegó lo que NEGROPONTE llamó la "era de la post-información", que plantea la evolución futura de Internet como el nacimiento de "una estructura global, totalmente nueva", pues si hace algunos años parecía que la "aldea global" era el reto del futuro, hoy Internet ha convertido en realidad presente el "hogar global", en la medida en que cada domicilio de los usuarios de la red constituye la terminal de un sistema integrado universal.

Y es que lo que parecía una moda pasajera, se ha consolidado en una realidad que ha cambiado los hábitos de muchas personas, pero debemos intuir que la revolución no ha hecho más que empezar, pues, si la red se abrió al público en general, hace poco más de 12 años, ahora se dice, aunque las cifras varían según las fuentes, que unas 1.000 millones de personas están conectadas a Internet.

Pero las nuevas tecnologías no son la panacea⁵⁹, el remedio a todos los males de la Justicia, ni siquiera la fórmula definitiva para acabar con las dilaciones que padece el justiciable, pero sí un instrumento más para tratar de agilizar una parte importante del proceso, una herramienta que puede ayudar a terminar con una de las que el propio Consejo General del Poder Judicial calificaba de "rémoras más importantes del proceso civil"⁶⁰: el excesivo tiempo empleado para la práctica de las comunicaciones procesales.

⁵⁵ La Instrucción núm. 1/2002, de 7 de febrero, sobre la posibilidad de celebrar juicios orales penales por videoconferencia aparece publicada en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia, suplemento al núm. 1935, de 15 de febrero de 2003.

⁵⁶ La Instrucción núm.3/2002, de 1 de marzo, sobre actos procesales que pueden celebrarse a través de videoconferencia, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, suplemento al núm. 1935, de 15 de febrero de 2003.

⁵⁷ Boletín Oficial del Estado fecha 26 diciembre de 2003.

⁵⁸ CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín, ¿Es necesaria una Legislación Mundial para Internet?, en Revista Iberoamericana de Derecho Informático núm. 27-29. UNED, Centro Regional de Extremadura en Mérida, 1998, pág. 161-181.

⁵⁹ DE HOYOS SANCHO, Montserrat, "Actos procesales de notificación y nuevas tecnologías", núm. 5751, Diario La Ley, 1 abril de 2003.

⁶⁰ LIBRO BLANCO DE LA JUSTICIA, Madrid, 1997, págs.190 y 191. Apuntaba el Consejo como principales causas de tal problema: la regulación legal, la organización de las Secretarías y los medios personales y materiales puestos al servicio de la Justicia.

Es fundamental recalcar que entre el procedimiento tradicional y el procedimiento electrónico no se manifiesta diferencia alguna en cuanto al contenido de la información almacenada.⁶¹ Lo que difiere es el **soporte** sobre el cual se hace asentar esa información y los **medios** por los cuales se manipula. En el procedimiento tradicional, el soporte básico es el papel, mientras que en el procedimiento electrónico se recurre a medios informáticos. En el primero la manipulación se realiza físicamente (agregando documentos de papel al expediente, movilizándolo de un despacho o funcionario a otro, etc.); en el segundo se emplean dispositivos y medios informáticos y telemáticos para ese fin.

Por último coincidimos, con GRACIELA, que las leyes quedarán siempre retrasadas ante el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías de la información.⁶² Pero ello no debe constituir un obstáculo para el mundo del derecho, al contrario, la red no debe ser regulada en forma estricta, sino que debe legislarse con fórmulas abiertas y flexibles, permitiendo que el marco de Internet encuentre prudentemente su justo equilibrio, debiendo las legislaciones adaptarse a los cambios tecnológicos.

⁶¹ HESS, Christian, Ponencia al VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, organizado por FIADI, en Lima, Perú, enero 2000.

⁶² GRACIELA LILIAN, Rolero, "Documento electrónico y firma digital. Necesidades de una legislación específica". II Congreso Internacional derecho y garantías en el siglo XXI, Buenos Aires, 25, 26 y 27 de abril de 2001, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.